

FOJA: 59 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3º Juzgado de Letras de Punta Arenas
CAUSA ROL : C-1500-2021
CARATULADO : FANJUL/FISCO DE CHILE

Punta Arenas, quince de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos:

En causa ingreso de este Tercer Juzgado Civil de Punta Arenas, Rol C-1500-2021, autos caratulados "Fanjul con Fisco", el día 12 de octubre de 2021, folio 1, compareció el abogado Pablo Andrés Bussenius Cornejo, en representación convencional de Cecilia Beatriz Fanjul Lizarralde, consultora internacional, domiciliada para estos efectos en calle Lautaro Navarro N°1066, Oficina 403, comuna y ciudad de Punta Arenas. Interpuso demanda ordinaria en juicio de hacienda para la indemnización de los perjuicios por daño moral sufridos por su representada en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representado para estos efectos por el Procurador Fiscal (S) del Consejo de Defensa del Estado, Claudio Patricio Benavides Castillo, abogado, ambos con domicilio en 21 de mayo N°1678 de Punta Arenas, o quien legalmente lo subroge.

Solicitó tener por interpuesta la demanda, acogerla en todas sus partes, condenando al demandado a pagar a su representada una indemnización por el daño moral sufrido, ascendente a \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos) o la suma o cantidad que este tribunal estime de justicia conceder conforme al mérito del proceso, más intereses, reajustes legales desde que la sentencia cause ejecutoria, con costas.

Indicó que el día 11 de septiembre de 1973 representa un día negro en la historia de nuestro país, no sólo por el violento quiebre institucional que culminó con el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Salvador Allende, sino que además porque cambió drástica y dramáticamente la vida de cientos de miles de chilenos. Ese día supuso un antes y un después; fue el inicio de las ejecuciones, desapariciones, prisión política, tortura, persecución, represión, censura, exilio y diáspora, en definitiva, fue el momento del miedo. A partir de ese día se instaura en Chile el terrorismo de Estado, en el que las gravísimas violaciones a los derechos humanos son perpetradas por agentes del propio Estado, amparados bajo un manto de impunidad forjado con recursos estatales. La

actuación del Estado o sus agentes que en forma injusta y arbitraria violentan las normas y la confianza que los ciudadanos depositan en los órganos públicos, los cuales en esencia están llamados precisamente a protegerlos, brindarles seguridad para el ejercicio de sus derechos y la satisfacción de sus legítimos intereses.

Refirió que el cruento balance de la dictadura cívico militar que transcurrió desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el mes de marzo de 1990 arroja, de acuerdo con las comisiones de verdad, 1.183 personas desaparecidas, otras 2.008 ejecutadas y al menos 35.868 personas torturadas, cifras que en ningún caso son cerradas, puesto que progresivamente se han incorporado nuevas víctimas que en un principio no se les calificó como tales. En ese contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos, Magallanes y sus habitantes no tenían por qué ser la excepción. Al respecto, el Informe Rettig, consigna que "(...) en la región de Magallanes se aplicó la tortura de modo habitual y se estima que alrededor de 1.000 personas estuvieron privadas de libertad y sometidas a ese tratamiento (...)". Por su parte, el Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura o "Informe Valech" indica que en Magallanes la tortura fue utilizada desde la instauración de la dictadura militar contra los prisioneros políticos, señalando textualmente "Todos los testimonios recopilados por la Comisión, de hombres y mujeres, denunciaron que en la Duodécima Región desde el primer momento se recurrió a torturas en contra de los prisioneros, con extrema dureza, especialmente en el año 1973".

Explicó que su representada nació en Punta Arenas el 26 de abril de 1953, hija única de Gilberto Fanjul Lamiré y Violeta Lizarralde Holteins, la familia Fanjul era conocida por ser dueña de la única curtiembre y peletería, que atendía clientes prominentes de la región y el país, estudió en la mejor escuela de la ciudad en aquellos años, la escuela religiosa María Auxiliadora, al pasar de primaria a secundaria fue expulsada por su participación política, la que inició tempranamente; producto de lo anterior fue matriculada en el Liceo de Niñas de la ciudad donde concluyó la secundaria en 1972. En tercero medio, fue electa presidente de la federación estudiantil de secundaria.

Agregó que para el año 1973, con 20 años de edad, cursaba primer año de la carrera de agronomía y veterinaria en la Universidad de Chile, con sede en la ciudad de San Felipe, era un proyecto experimental con apoyo y asesoría búlgara,

que articulaba la academia, esto es, la teoría, y la praxis productiva de la región de manera continua desde el primer año. Fue elegida presidenta de la Federación de Estudiantes del recinto universitario, a la par como lo venía haciendo en los últimos 7 años, militante de la Juventud socialista y parte del secretariado de la región.

Relató que el 11 de septiembre de 1973 alrededor de las 11:00 am, la demandante fue capturada en la ciudad de San Felipe por el Ejército de Chile, específicamente por la unidad de caballería acantonada en ese lugar, junto a su núcleo partidario de la juventud socialista, partido en el que militaba. Desde el momento que irrumpieron en la vivienda, fueron sometidos a violencia a través de golpes, patadas, culatazos y trato denigrante, especialmente, las dos mujeres del grupo. Fueron trasladados al Regimiento de Caballería de San Felipe, continuando los golpes, empujones y ofensas, siendo sometidos y sometidas a un simulacro de fusilamiento; los ataques verbales reflejaban claramente que los militares los veían como enemigos y una gran amenaza, pues se referían a ellos como “comunistas”, “putas”, “criminales”, y “basura”, entre otros calificativos.

Narró que los 6 detenidos, 2 mujeres y 4 hombres, fueron ubicados en fila de espaldas a un muro perimetral, ubicándose 6 soldados en fila armados y orientados por su superior a dispararles, en ese momento sólo pensó en su madre y padre que probablemente no la encontrarían nunca. Al momento que se dio la orden de disparar sufrió lo que se llama un shock emocional, lo que le dificultaba entender o comprender si estaba viva o muerta, reaccionó tardíamente, no podía hablar o expresar alguna emoción, fue trasladada con su compañera a las celdas de carabineros de la ciudad, ahí los siguieron maltratando psicológicamente a través de insultos, gestos vulgares, tocamientos lascivos, sin alimentos ni agua, la celda donde estaban no tenía acceso para realizar las necesidades fisiológicas básicas. Su detención duró aproximadamente 10 días, esto tanto en dependencias del ejército como de carabineros de San Felipe. Permaneció con la misma ropa y sin posibilidades de aseo personal mínimo, sufrió de humillación y degradación. Luego, las dos mujeres fueron dejadas en libertad, mientras los 4 compañeros, después de ser severamente torturados, fueron trasladados a la cárcel pública y sometidos a un proceso amañado donde fueron condenados posteriormente.

Indicó que después de la experiencia vivida en San Felipe a mediados de octubre del 1973 y buscando resguardo, viajó a Punta Arenas, lugar donde pudo

estar sólo cuatro días. La mayoría de sus compañeros y compañeras, habían sufrido detenciones ilegales, algunos compañeros al enterarse que había regresado a la ciudad, entre ellos Hernán Biott, intentaron a través de sus familiares contactarla, para advertirle que era mejor salir rápidamente de la ciudad, por lo que nuevamente debió trasladarse, esta vez con destino a Valparaíso.

Recordó que su segunda detención, estuvo estrechamente vinculada a su militancia en Punta Arenas, que se inicia desde los 13 años hasta egresar de la secundaria, continuando activamente como estudiante en la Universidad de Chile, donde ingresó el año 1973 a estudiar ingeniería agrícola en la sede de San Felipe.

Expresó que luego de su breve estadía en la ciudad de Punta Arenas, la última semana de octubre del 73, salió con destino a la ciudad de Quilpué, resguardándose en la casa de un familiar. El día 10 de enero de 1974 a las 6:40 pm, la casa quinta en la que se encontraba, sorpresivamente fue rodeada por miembros de la fuerza área de la Base "El Belloto", quienes se trasladaban en tres camiones, arma en mano rodearon la propiedad, ingresando violentamente al domicilio un grupo armado, preguntando por ella, al identificarse la agarraron, tiraron contra la pared, manosearon todo su cuerpo. Fue esposada con las manos en la espalda, mientras realizaban un feroz allanamiento en la casa y el patio en busca de armas, una vez cumplido el operativo, fue esposada también la dueña de la casa y una de sus hijas, siendo trasladadas todas juntas. A pesar que de manera insistente trató de saber por qué estaban ahí y a dónde las llevaban, las respuestas eran insultos y obscenidades, una vez en el jeep que las trasladaban, les taparon la vista con un trapo sucio, causándole una situación de estrés y miedo, por no entender en ese momento por qué la buscaban ahí y no saber dónde iban.

Comentó que se percató que estaban saliendo de Quilpué, por el ruido de las olas del mar estaban pasando por Viña del Mar, posteriormente Valparaíso por el ruido de los motores de los barcos, en ese momento era aproximadamente media noche. El vehículo se detuvo y las bajaron con mucha de violencia. Vendada aún, la arrastraron del pelo, empujaron y golpearon para subir una escalera, que era muy larga, pegándole golpes en la espalda para que se apurara en la subida, la travesía fue larga e interminable, así como los golpes, insultos de todo tipo y calibre, y amenazas de lo que sufriría en el futuro, sentía el ruido del puerto muy

cerca. Al llegar a una cima, la empujaron y tiraron al suelo, sin poder ver mucho se dio cuenta que estaban en una planicie, especie de cancha de basquetbol, cuando se tranquilizó empezó a escuchar gritos desgarradores, terribles, que a estas alturas aún son recurrentes en sus pesadillas. La arrastraron y pegaron la espalda a la pared, ahí estuvo horas, logró darse cuenta que había varias salas de interrogación y tortura y por lo que escuchaba estaban divididas por partido político o movimiento, MIR, PS, PC, etc. Lo más traumatizante y aterradorante en ese momento fue que tiraron como un saco a su lado a un compañero, los mismos torturadores comentaron que no había aguantado la tortura, respiraba con mucha dificultad casi de manera inaudible, sintió que estaba muriendo. Posteriormente la llevaron a rastras a una de las salas de interrogación, en la misma había dos hombres y una mujer, después se enteró que cada sala estaba compuesta por tres torturadores. A golpes y patadas la entraron y sentaron en una silla sacándole la esposas, no podía dejar de pensar en el compañero que había quedado tirado en la cancha, le gritaban que dijera su nombre, inicialmente no pudo reaccionar, sentía que tenía su memoria en blanco, logró decir Cecilia pero no recordó nada más, lo que provocó la furia de los torturadores, uno de ellos le pegó un puñete en la frente que corrió la silla hasta la pared pegándole en la parte posterior de la cabeza, no podía reaccionar, no recordaba sus apellidos. Tras los golpes, al no obtener respuesta, le aplicaron electricidad en los dedos de las manos, muñecas y tobillo, no pudo retener esfínter y perdió el conocimiento. No sabe realmente cuanto tiempo estuvo inconsciente, sólo que estaba en el suelo y tenía la cabeza mojada, en ese momento la agarraron, sentaron frente a una especie de mesa o escritorio, le sacaron la venda de los ojos, frente a ella estaba una especie de expediente con una fotografía de ella reciente, los torturadores estaban detrás de ella, imagina para que no los pudiera identificar posteriormente, uno de ellos la conminó a que leyera lo que estaba escrito, primero su nombre y apellidos, le preguntó si recordaba que esa era su identidad, reaccionando nuevamente y enfrentando lo que le estaba pasando les dijo que sí, que esa persona era ella, le pusieron inmediatamente la venda e informaron que formaba parte de una lista de subversivos buscados a nivel nacional, que había una orden de búsqueda y captura en todo el país, por graves acusaciones de terrorismo, subversión e inteligencia hacia las fuerzas militares en la Región de Magallanes. Fue informada allí que era

requerida por las autoridades de la dirección de Inteligencia del Ejército (SIM) de Punta Arenas, por un sinnúmero de cargos, entre ellos el contacto con los montoneros argentinos, compra de armas, distribución de explosivos y no recuerda que cosas más y que sería trasladada a su ciudad natal, los cargos imputados le daban pie a quienes la tenían detenida para realizar interrogatorio, tras interrogatorio.

Relató que ingresaron a la sala a la hermana de su pololo, comenzaron a interrogarla y a golpearla, amenazándola que sí no hablaba sobre sus contactos en la zona las matarían a las dos, a ella la obligaron decir su nombre varias veces para que según ellos no tuviera pretexto para no responder. Permaneció recluida en el Silva Palma dos meses, los primeros 40 días en calidad de desaparecida, ya que no figuraba en ninguno de los listados de la Cruz Roja Internacional. Inicialmente la encerraron en una celda oscura, húmeda y sola, típico de un fuerte, donde había un orificio en el piso para realizar las necesidades sin agua y sin papel higiénico, ratas, cucarachas, entre otros esta situación le generó un sentimiento de degradación como ser humano, sin ubicación espacial ni temporal, no sabía que día era, ni la hora; la comida a veces llegaba y otras no. A la semana la comenzaron a levantar de madrugada para llevarla a un recinto con baños y ducha, donde se pudo bañar por primera vez y lavar la ropa que tenía puesta, se encontraba putrefacta y hedionda; con tal de no sentir el olor y pestilencia se bañaba desnuda frente a dos o más marinos que llegaban a verla debiendo escuchar sus obscenidades, en estas ocasiones tuvo la oportunidad de ver a oficiales de la marina que también estaban en calidad de detenidos desaparecidos, en esas mazmorras.

Recordó que la trasladaron a una celda más grande, con un poco más de luz y le entregaron una sábana asquerosa que decía "Barco Escuela La Esmeralda", en esa celda ponían a las detenidas que venían para interrogatorios. Allí en una de las ocasiones en que estaba sola, uno de los cuidadores entró a la celda por la noche y trato de violarla. Dormía en el tercer camarote pegado al techo como una forma de protegerse del abuso sexual, en esa ocasión este hombre la agarró y tiró al suelo, el golpe fue muy fuerte comenzó a gritar y forcejear y él a tratar de dominarla físicamente, afortunadamente escuchó uno de los guardias y logró salvarse de la violación, sin embargo, quedó bastante maltratada; en la enfermería

le pusieron un soporte para que no le doliera el hombro. En esta celda comenzó a llegar un capellán de marina, que llegaba en plan ablandador "...hija por favor habla y di lo que sabes para que no sufras más..." o cosas por el estilo.

Agregó que hasta el momento de su traslado a Punta Arenas, fue sometida a interrogatorios donde era golpeada y vejada sexualmente, por uno de los interrogadores varones y, especialmente, por una mujer, quienes le tocaban todo el cuerpo y manoseaban especialmente en la parte de la vagina, senos, el cuello, etc. La mujer de nombre Cecilia, era infiltrada en la juventud socialista en Valparaíso y en varias ocasiones se habían encontrado.

Relató que como a la cuarta semana de estar recluida recibió, una caja con alimentos y una muda de ropa que le enviaba su madre que viajó de Punta Arenas a Valparaíso, ella comenzó a hacer presión en la intendencia de Valparaíso y la Cruz Roja para que apareciera en la lista de presos de la intendencia. La madre y hermana de su pololo que fueron detenidas y estuvieron 24 horas en el Silva Palma, dando testimonio acerca de su paradero.

Refirió que a finales del mes de febrero los últimos días, la sacaron de la celda y trasladaron al Puerto de Valparaíso y subieron al AP-47 Aquiles, buque de la Armada de Chile, que hacía travesías de abastecimiento, logística, traslados de personal de la armada y sus familiares entre otras, hasta Puerto Williams. La sacaron del Silva Palma nuevamente encapuchada, fue entregada a la jefatura del barco quien ordenó, que le sacaran la capucha, por ser de día y causaba una mala imagen, aunque le dejaron las esposas. Fue ubicada en un camarote totalmente sellado, en la parte baja del barco a pocos metros de la cocina, comedor para sub-oficiales y la lavandería. Esta travesía que duró 12 días fue la peor de sus torturas ya que desde muy pequeña por un accidente que tuvo en la playa con su padre, tenía fobia al mar, vivió 12 días de terror, especialmente, en la travesía del Golfo de Pena entre Chiloé y Punta Arenas. Le generó insomnio, pesadillas que se transformaban en gritos que los conserva hasta el día de hoy, inapetencia, temblor corporal, angustia, palpitaciones, sudoración, cefaleas, dolor corporal y psíquico, hoy que lo revive cree que estaba al límite de resistencia emocional.

Expuso que su camarote estaba vigilado las 24 horas. Antes de llegar al puerto de Chillán en una amanecida entró a su camarote el encargado de la lavandería con la intención de violarla, el camarote era pequeño y sólo con dos

literas con dos camas cada uno, se le tiró encima semi desnudo, logró saltar del segundo piso del camarote, como había dejado la puerta entreabierta, salió gritando como una loca, en eso venía llegando el guardia quien dio la alarma, el marino fue arrestado. Después de este episodio y al ver su estado de pánico la dejaron en libre platica con un guardia, con él podía caminar por el barco y sentarse en la borda.

Recordó que al llegar a Punta Arenas más o menos a media hora antes de atracar, un día domingo la regresaron al camarote celda, al atracar el AP-47 Aquiles subieron 3 hombres de civil de la SIM, al llegar al camarote ella estaba en el baño, eso los enfureció y en el baño mismo comenzaron a golpearla. La subieron a un vehículo, la tiraron al suelo y uno de estos hombres le puso el pie en la cabeza para que no la levantara, parte de la furia se debía a que en el muelle se encontraba su padre, y querían que les dijera como él había tenido información que venía en ese barco, los golpes se repitieron durante el traslado al Regimiento de Ojo Bueno, donde estaban sus compañeras y amigas. Al llegar la metieron al freezer del recinto, donde la tuvieron por un tiempo antes de ser ubicada en el pabellón de las compañeras del partido comunista. Durante las dos semanas de reclusión en Punta Arenas la llevaron a la Casa del Deportista y a la Clínica 21 de mayo.

Declaró que al día siguiente de su llegada, un día lunes a primera hora llegaron a buscarla; las primeras instrucciones fue tomar dos pastillas que le entregaron. La trasladaron igual que el día anterior en el suelo del vehículo con un pie en la cabeza a la "Casa del Deportista" con la vista vendada, podía ver los pies de la gente, la metieron a una sala donde había 4 hombres, comenzando con insultos y vejaciones ya que la identificaban como la compañera o polola de un líder del Partido Socialista que había logrado escapar de Punta Arenas. Así que los insultos iban de "puta" para arriba, preguntando por armas y explosivos que habían sido trasladados desde Río Gallegos a Punta Arenas, siendo ella, supuestamente, una de las encargadas del trasiego y responsable de la coordinación con "los montoneros", organización político militar argentina; el interrogatorio también se centró en tratar de ubicar el paradero de Eduardo Ramírez Zañartu.

Manifestó que el saludo fue con golpes, sin embargo al segundo día hubo una variante, uno de los torturadores, no sabe si era médico o siquiatra o algo por el estilo, decidió que su interrogatorio sería a través de la hipnosis, ya que con el método tradicional violento no habían conseguido ninguna información el día anterior, le sacaron la venda y supuestamente las pastillas que le habían dado debía sufrir sus efectos. Iniciaron su sesión y para valorar si estaba consiente o no, comenzaron a pincharla con agujas en todo el cuerpo, manos, brazos, espalda, piernas de manera interminable, la hacían estirar los brazos por largo tiempo para ver si los movía, temblaba o daba muestras de conciencia, la ponían en posiciones incómodas para valorar si los resistía, la hipótesis era que si no hacía movimientos estaba hipnotizada. Esta tortura se prolongó por 3 días en la "Casa del Deportista". Al cuarto día la condujeron a un inmueble ubicado en calle 21 de Mayo, posteriormente supo que era el Centro Clínico Militar, en este lugar el grupo de torturadores eran diferentes a los que habían intentado investigarla los días anteriores, intentaron a través de la violencia y la amenaza de ser violentada sexualmente que confesara su vínculo y diera los nombres de los supuestos cómplices. Al no obtener resultados intentaron nuevamente la hipnosis sin resultados.

Mientras tanto sus compañeras en esos días no fueron requeridas, esperando los resultados de los interrogatorios a los que estuvo sometida, lo que dio tiempo para prepararlas psicológica, física y emocionalmente para sesiones parecidas, especialmente con su amiga y hermana Magda Ruiz. Una vez que quedó en libertad, que se hizo efectiva con la entrega de su persona a su madre en su casa, ésta última fue vigilada hasta el día que salió de la ciudad.

Narró que permaneció en Chile hasta 1976, saliendo del país el mes de agosto, la siguieron persiguiendo en la quinta región donde vivió esos años. Tras apoyo y protección de la Organización Internacional de la Migración (OIM) y la Vicaría de la solidaridad pudo salir de Chile, el país de acogida fue los Estados Unidos de Norte América, en el Estado de Illinois. Al nacer su hijo mayor quiso regresar a su país en 1978, al solicitar su pasaporte a la embajada de Chile en los Estados Unidos, fue informada que su nombre formaba parte de una lista de personas nacionales que no podían retornar nuevamente. El año 1985 fue amnistiada otorgándole autorización para entrar nuevamente al país.

Manifestó que regresó a Chile en el año 1985 a visitar a sus padres acompañada de sus dos hijos menores, pero también a sondear las posibilidades de retorno, estuvo durante un mes en la ciudad de Punta Arenas, en ese período le quedó claro que no había condiciones o garantías de seguridad para su familia y ella, desde el primer día fue vigilada, un vehículo con gente de civil permanecía frente a la casa de sus padres y dando seguimiento visible cuando salía y caminaba por la calle.

Mencionó que desde 1979, reside permanentemente en Nicaragua, en la ciudad de Managua donde nacieron dos de sus tres hijos.

Argumentó que esta experiencia, como ocurrió con las presas y presos políticos de Chile, le ha dejado grandes secuelas como: depresión crónica, alteraciones del sueño perturbadoras como pesadillas y gritos nocturnos; las cefaleas continuaron por muchos años, la ansiedad le ocasiona crisis de pánico aunque en la actualidad logra controlarlos, de igual manera como mecanismo de defensa emocional sufre de lagunas mentales, desarrollando memoria selectiva, especialmente, con asociar nombres con personas, números de teléfono, direcciones y algunos episodios vividos, ha tenido que pasar por tratamientos que la apoyen con la reparación y recuperación emocional, así como el duelo de la pérdida de los sueños de juventud, afectos y patria, el salir de su país, creando un sentimiento de desarraigo que se expresó y expresa en la pérdida de su identidad personal, el sentido vital de sus vínculos familiares, sociales, culturales y político repercute hasta el día de hoy en su vida emocional e indirectamente en sus hijos e hija.

Alegó que la demandante fue reconocida por el Estado de Chile como víctima directamente afectada por violaciones a los derechos humanos, y figura individualizada en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el D.S. N°1040 de 2003, del Ministerio del Interior.

Explicó que los antecedentes expuestos, sin duda, forman parte del catálogo de crímenes reconocidos en la comunidad internacional y en el Derecho Internacional, como "Crímenes de Lesa Humanidad". La primera formulación para esta categoría de delitos, la encontramos en el Estatuto del Tribunal Penal Internacional de Nuremberg de 1945, el que tuvo por objeto juzgar las atrocidades

cometidas durante la Segunda Guerra Mundial; y surge como respuesta a la insuficiencia de la categoría "Crimen de Guerra" que sólo podía aplicarse a actos que afectaran a combatientes enemigos excluyendo los crímenes cuyas víctimas eran del mismo país, de estados aliados o apátridas. Según Bassiouni la trascendencia de dicho Estatuto reside en que "fue la primera instancia en el derecho penal internacional positivo que se usó el término específico de 'crímenes contra la humanidad'; asimismo, sería la primera vez que esta categoría de derecho internacional fue definida" (BASSIOUNI, Cherif. 1992. Crimes Against Humanity in International Criminal Law. Dordrecht, Martinus Nijhoff, p. 583).

Sostuvo que desde la terminación de los procesos de Nuremberg no se siguió ningún otro juicio ante tribunales internacionales sino hasta el comienzo de los años noventa, en donde se instauraron los Tribunales Penales Internacionales para la ex Yugoslavia ("TPIY") y para Ruanda ("TPIR"). Los estatutos de ambos Tribunales contribuyeron a reforzar la punibilidad consuetudinaria de los crímenes contra la humanidad, siguiendo en líneas generales y en lo esencial al Estatuto de Nuremberg. Sin embargo, tanto el Estatuto del TPIY como el del TPIR representan un nuevo avance en la materia al tipificar una mayor cantidad de conductas punibles a las establecidas en el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg, que no contemplaba al encarcelamiento, a la tortura y a las violaciones. Así, en el año 2002 se llega a la culminación de un largo proceso de desarrollo del derecho penal internacional, mediante el establecimiento de la Corte Penal Internacional (que incluye la descripción de los crímenes de lesa humanidad), cuyo Estatuto ("Estatuto de Roma") se convierte en el instrumento jurídico más importante y actualizado en la materia.

Explicó que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tratado internacional vigente en nuestro país desde el día 01 de septiembre de 2009, tipifica, en su artículo 7 estos crímenes, reproduciendo dicho artículo.

A nivel de normativa interna, mencionó y reprodujo el artículo 1 de la Ley N°20.357 que "Tipifica Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio y Crímenes y Delitos de Guerra".

En el plano conceptual, citó voto de disidencia del Ministro Sr. Cisternas, en causa Rol N°31.711-17 de la Excelentísima Corte Suprema, de fecha 23 de enero de 2018.

Concluyó que en el caso de marras nos encontramos frente a ilícitos que constituyen Delitos de Lesa Humanidad, por lo que el Estado no puede eludir su responsabilidad civil por los padecimientos y dolores irrogados, evadiendo a la normativa humanitaria internacional de naturaleza ius cogens.

Arguyó que el concepto de responsabilidad es inherente al Estado de Derecho, además de ser un concepto jurídico fundamental sin el cual no es posible comprender y entender el Derecho como realidad normativa. El principio de responsabilidad es un principio fundamental del Estado de Derecho, cuya expresión es que cualquier individuo que sea lesionado por otro en su persona física o moral, bienes o derechos, tiene derecho a que se le repare el daño ocasionado, generando con ello para el causante la obligación de indemnizar. Se trata de un principio que impregna todo nuestro ordenamiento jurídico y adquiere las más variadas formas a través de estatutos jurídicos especiales de responsabilidad. Se habla, así, dependiendo del deber jurídico infringido, de responsabilidad penal, responsabilidad civil, responsabilidad política o constitucional, responsabilidad administrativa, responsabilidad medio ambiental, etcétera; pudiendo una misma infracción generar una o más clases de responsabilidad que pueden concurrir separada o conjuntamente.

Aclaró que tratándose de violaciones a los Derechos Humanos, la responsabilidad del Estado, y más específicamente, la obligación indemnizatoria del mismo, surge de la interacción normativa entre reglas internas, fundamentalmente de derecho constitucional, y reglas internacionales contenidas en diversas fuentes de Derecho Internacional Público. La utilización de reglas interpretativas desarrolladas fundamentalmente por el Derecho Internacional, como son los principios de interpretación de buena fe, principio "pro homine" o "favor libertatis", interpretación evolutiva, equidad como criterio de integración e interpretación judicial, y las reglas de ius cogens, como fuente normativa y como elemento para situar las reglas convencionales de Derecho Internacional.

Al respecto citó el considerando sexto de fallo Rol N°31.711-17 y considerando décimo Rol N°20.288-14 de la Excma. Corte Suprema.

Citó y reprodujo el artículo 1 inciso 4° de la Constitución Política de la República, y mencionó que el profesor Humberto Nogueira a propósito de este inciso señala que "la persona es el objetivo y finalidad de toda la actuación estatal,

estando el Poder Público al servicio de la dignidad y de los derechos de la persona humana, aspectos esenciales que integran el bien común como fin y tarea de los órganos estatales” (NOGUEIRA., Humberto. “Los derechos esenciales o humanos contenidos en los tratados internacionales y su ubicación en el ordenamiento jurídico nacional: doctrina y jurisprudencia”. Revista Ius et Praxis, vol. 9, (1): pp. 403-466, 2003. [en línea])

Alegó que el bien común y los derechos fundamentales que arrancan de la naturaleza humana son dos conceptos íntimamente ligados, por cuanto la promoción del bien común implica inexorablemente el respeto de estos derechos, aceptar algo distinto significaría desvirtuar el objeto servir a la persona humana y fundamento principal del Estado.

Luego, mencionó y reprodujo el artículo 5 inciso 2° de la Constitución; y razonó que la parte final de este artículo fue introducida por la reforma constitucional de 1989. Esta modificación consigna para el Estado obligaciones de respeto y promoción de los derechos esenciales emanados de la naturaleza humana. El Estado ya no acota su labor a la observancia pasiva y resguardo a posteriori de ciertos derechos enumerados en un catálogo determinado pues promover implica una actitud activa encaminada al impulso y fomento de los derechos en cuestión. De modo tal que, junto con reforzar la protección constitucional de los derechos humanos, consolida el desarrollo de un bloque constitucional integrado por derechos asegurados formalmente en la Carta Magna y derechos y garantías contenidos en tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes- y reconoce en la propia Constitución la existencia de otros derechos humanos no considerados en ella, maximizando el plexo de derechos y garantías fundamentales.

Explicó que las disposiciones reseñadas, en conjunto con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política, que consagran los principios de supremacía constitucional y de legalidad respectivamente, conforman el denominado estatuto de responsabilidad extracontractual del Estado. Reprodujo dichos artículos y señaló que conforme a los mismos, el Estado es responsable cuando sus órganos actúan al margen del derecho, ya sea vulnerando normas constitucionales o legales dictadas conforme a la Constitución (artículo 6, inciso 1°), o asumiendo funciones respecto de las cuales carecen de competencia legalmente atribuida (artículo 7).

Estas infracciones generan dos tipos de efectos: la nulidad del acto administrativo y la responsabilidad del Estado por los perjuicios ocasionados.

Invocó el artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política, que establece una verdadera acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos por su actividad, ya sea lícita o ilícita, provoquen un daño a una persona natural y/o jurídica.

Indicó que en materia de responsabilidad del Estado, son pertinentes los artículos 2, 3, 4 y 42 inciso 1 de la Ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En cuanto a las reglas positivas en el derecho internacional, nombró los artículos 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y razonó que ha sido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que ha visto en este artículo el fundamento de la responsabilidad internacional, citando fallos en este sentido como son el caso "Godine Cruz vs Honduras", Caso "Almonacid", Caso "Goiburú y otros" y Caso "La Cantuta".

Al respecto observó que a juicio de la CIDH, el antes citado artículo 1.1. establece el fundamento del sistema de responsabilidad internacional para los Estados que son parte del sistema Interamericano, sometiendo a sus miembros a los imperativos del Derecho Internacional.

Luego, invocó y reprodujo el artículo 2 y 63.1 de la CADH, argumentando que este último constituye la adopción por parte de la Convención de un principio del derecho internacional y, en general, del Derecho sobre la responsabilidad en orden a que quien daña a otro debe ser obligado a reparar los perjuicios causados, indemnizando.

Agregó que con base en lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. Al respecto citó fallos de la Corte dictados en Caso Trujillo Oroza, Caso Cantoral Benavides, Caso Cesti Hurtado, Caso Villagrán Morales y otros, y Caso Bámaca Velásquez.

En lo que respecta a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, señaló y reprodujo los artículos 26, 27 y 53. Luego, del Estatuto de Roma citó y transcribió el artículo 38 letra c.

Explicó que la "reparación integral" implica que "debe repararse todo el daño, no más allá del daño, pero todo el daño". A nivel del sistema universal de derechos humanos, su expresión formal se encuentra en la Resolución de la Asamblea General N.Q 60/147, sobre "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones", aprobada el 16 de diciembre de 2005. Aunque esta resolución no tiene la fuerza normativa de un tratado internacional, es particularmente relevante, en la medida en que, como señala el propio preámbulo de la resolución, estos principios, "no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales", sino que proponen mecanismos para hacerlas efectivas. En este sentido, destacó que la resolución establece expresamente el derecho de las víctimas a obtener una "reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido" (art. 11), mediante (i) la restitución; (ii) la indemnización; (iii) la rehabilitación; (iv) la satisfacción; y (v) la garantía de no repetición (art. 18). La propia resolución define cada uno de estos mecanismos. La primera, busca devolver a la víctima a la situación anterior a la violación de sus derechos (art. 19). La segunda debe cubrir todos los perjuicios susceptibles de evaluación económica, incluyendo, entre otros, el daño físico y moral (art. 20). La rehabilitación, se refiere a la atención médica, jurídica y social (art. 21). La satisfacción incluye medidas como la revelación completa de la verdad, las disculpas públicas y las sanciones a los responsables, entre otras (art. 22). Finalmente, las garantías de no repetición son aquellas medidas orientadas a la prevención, tales como el control civil sobre las fuerzas armadas, o la educación en derechos humanos, entre otras (art. 23).

Añadió que en el ámbito interamericano, la CADH dispone que, establecida la violación de un Derecho, la CIDH debe disponer "que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada" (art. 61). A partir de esta norma, la Corte IDH ha construido el deber estatal de reparación

integral (*restitutio in integrum*) a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, éste emana de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la CADH (Corte IDH, 1988).

Mencionó que el primer caso contencioso que arribó a las puertas de la CIDH en el que se debatió la *restitutio in integrum* fue Velásquez Rodríguez c/ Honduras, donde se puso en tela de juicio la responsabilidad internacional de Honduras respecto a la desaparición forzada de Ángel Manfredo Velásquez Rodríguez; concluyendo con sentencia de fecha 21 de julio de 1989. En sus líneas la CIDH indicó "La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral". Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una de sus sentencias más antiguas, ha establecido que: "Es un principio de Derecho internacional, que la jurisprudencia ha considerado "incluso una concepción general de derecho", que toda violación a una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. La indemnización, por su parte, constituye la forma más usual de hacerlo (...) La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Velásquez Rodríguez). De esta manera, tanto el sistema universal como el interamericano reconocen un derecho a la reparación integral, la cual incluye la indemnización pecuniaria de todos los perjuicios económicos, aunque no se agota en ella.

Manifestó que dicha opinión es compartida por nuestra excelentísima Corte Suprema, citando al respecto el considerando Octavo del Rol N°20.288-14; razonando que la necesidad de brindar una reparación integral a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, aparece en sintonía con lo que se estima debiera ser la finalidad del sistema de protección internacional de derechos

humanos “Esto no es una cuestión menor, dado que este paulatino y constante avance en la materia refuerza cada vez más la idea que la finalidad principal que debe perseguir un sistema de protección internacional de derechos humanos no es declarar la responsabilidad internacional de un Estado, sino que lo central es apuntar principalmente a la plena reparación de quien o quienes resultaron víctimas de la acción u omisión imputable a un Estado” (ROUSSET SIRI, Andrés Javier. “El concepto de reparación integral en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Revista Internacional de Derechos Humanos / ISSN 2250-5210 / 2011 Año I – N 0 1 www.revistaidh.org).

Explicó que el concepto de reparación integral en nuestro país sería conteste con el “Principio de la Reparación Integral del Daño”, citando al respecto fallo Rol N°3844-2010 de la Excma. Corte Suprema.

En cuanto al daño moral, mencionó que tradicionalmente la jurisprudencia de nuestros tribunales adscribió a una definición restrictiva de daño moral, la que comúnmente se identificaba con la expresión latina *pretium doloris* o “precio del dolor”, en la que se definía al daño moral como el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física, en sus sentimientos o afectos o en su calidad de vida. Sin embargo, *Pretium doloris* no es más que un tipo de daño moral. En palabras del Marcelo Barrientos Zamorano, profesor de Derecho Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile “Consideramos que la expresión “daño moral” se relaciona con un concepto jurídico indeterminado mucho más amplio hoy que el simple *pretium doloris*, que no es sino una especie más de daño moral. Esta expresión sería conveniente dejarla a un lado como expresión válida para este daño inmaterial. (...) no todo daño extrapatrimonial es *pretium doloris*, aunque todo *pretium doloris* sí es un daño extrapatrimonial, hay una relación más bien de género a especie.” (BARRIENTOS ZAMORANO, Marcelo. “Del Daño Moral al Daño Extrapatrimonial: La Superación del *Pretium Doloris*”. Revista Chilena Derecho [online]. 2008, vol.35, n.1 pp.85-106). En este sentido citó jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema Rol N°10649-15, y Rol N°3844-2010; de allí, concluyó que es más acertado definir el daño moral en un sentido amplio, como la lesión a los intereses extrapatrimoniales de la víctima, de esta forma es posible comprender en la reparación todas las categorías o especies de perjuicios morales y no sólo el *pretium doloris*.

Mencionó que la profesora Carmen Domínguez Hidalgo ha manifestado sobre el punto: “Estamos con aquellos que conciben el daño moral del modo más amplio posible, incluyendo allí todo daño a la persona en sí misma física o psíquica, como todo atentado contra sus intereses extrapatrimoniales. Comprende pues el daño moral todo menoscabo del cuerpo humano, considerado como un valor en sí y con independencia de sus alcances patrimoniales”. Y agrega: “En suma, el daño moral estará constituido por el menoscabo de un bien no patrimonial que irroga una lesión a un interés moral por una que se encontraba obligada a respetarlo”. (DOMÍNGUEZ HIDALGO, Carmen. En “El Daño Moral”, tomo I, Editorial Jurídica de Chile, 2002, páginas 83 y 84). Por su parte, Enrique Barros Borie nos aporta una clasificación de tipos de intereses susceptibles de perjuicio moral: (a) Atributos de la personalidad, tales como el honor o la honra, la intimidad o la propia imagen, cuya lesión involucra generalmente aspectos patrimoniales y extrapatrimoniales; (b) Intereses relacionados con la integridad física y psíquica, tales como el dolor corporal, los perjuicios estéticos o de agrado; cualquier deterioro del normal desarrollo de la vida familiar, afectiva o sexual; los daños en la autoestima a consecuencia de lesiones o la pérdida de miembros; y los llamados perjuicios de afeción, ocasionados por el sufrimiento o muerte de un ser querido. En una extensión más bien exorbitante del perjuicio afectivo, los tribunales incluso han dado lugar a daño moral por la pérdida o daño a cosas corporales; (c) Intereses relacionados con la calidad de vida en general: Constituyen lesiones a estos intereses las molestias ocasionadas en razón de la vecindad, tales como ruidos molestos, humos y malos olores, algunos daños ecológicos; muchos daños a intereses relacionados con la integridad física y psíquica afectan, asimismo, la calidad de vida de la víctima (daños de agrado, derivados de la imposibilidad o la disminución de la capacidad de disfrutar las ventajas o placeres que en circunstancias normales pueden esperarse de la vida). (Ugarte D., E. y Vicari V., A. (2001). Edición del curso de responsabilidad civil extracontractual del profesor Enrique Barros Bourie: jurisprudencia y doctrina. Disponible en <http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/114777>).

Afirmó que más allá de cualquier conceptualización, en el caso de la demandante y, en general, de todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país a contar del mismo 11 de septiembre de

1973, la lesión o violación de los derechos de las víctimas ha ocurrido en el plano de los derechos fundamentales de las personas, inherentes e inseparables de su condición humana. Humberto Nogueira Alcalá identifica la dignidad humana como fundamento de los derechos fundamentales, refiriéndose a ella en los siguientes términos: “Ello nos lleva a la afirmación de la dignidad humana como la cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable de todo y a cualquier ser humano, constituyendo un elemento que cualifica al individuo en cuanto tal (...). (...) La dignidad humana constituye así el mínimo invulnerable del ser humano que el ordenamiento jurídico debe asegurar respecto de cada uno y todos los derechos fundamentales, los cuales tienen en ella su fundamento y base sustantiva, en la medida que todos ellos contribuyen a desarrollar ámbitos propios de la dignidad humana. (NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. “El Bloque Constitucional de Derechos en Chile, El Parámetro de Control y Consideraciones Comparativas con Colombia y México: Doctrina y Jurisprudencia”. Estudios constitucionales [online]. 2015, vol.13, n.2, pp.301-350).

Aseguró que la vida de las demandantes, como la de tantos otros, fue interrumpida de la forma más violenta e inhumana, siendo víctimas de una serie de hechos sistemáticos y criminales por parte de los organismos de seguridad de la Dictadura Militar de la época.

En lo que respecta al daño moral y a su reparación, alegó que estas violaciones fueron sistemáticamente ejecutadas por órganos estatales en el cumplimiento de una política terrorista del Estado, lo que produjo un considerable, indeleble, profundo, extenso y perdurable daño moral que marcó para siempre sus vidas, que les privó de libertad, de la compañía de su familias, de sus amigos, de sus colegas de trabajo, de sus compatriotas, del goce de una existencia plena, libre de asechanzas, de peligros, de riesgos, libre de agentes del Estado amparados en la impunidad dispuestos a violar sus derechos humanos. El dolor, el sufrimiento, el temor, la angustia, la sensación de pérdida, desarraigo, rabia, impotencia, sensación de vulnerabilidad, lo injusto y absurdo de la situación a que se vieron enfrentadas, configuran evidentemente un daño moral, que como hemos visto, resulta indemnizable.

Ahora bien, respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, hizo presente que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en

señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado; en dicho sentido cita jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema Rol N°1568-2017 y Rol N°26.023-19.

Expresó que idéntico criterio al de la dogmática y la práctica judicial chilenas, se halla a nivel de la jurisprudencia internacional. En la actualidad, ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional.

Finalmente, aun cuando ninguna cifra podrá reparar todo el daño experimentado por las víctimas de violaciones a los derechos humanos, solicitó se condene al Fisco de Chile a pagar a la demandante la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos), por el daño moral sufrido producto de los hechos descritos en la presente demanda.

El día 18 de marzo de 2022, folio 13, compareció el abogado procurador Fiscal de Punta Arenas Claudio Benavides Castillo, por el Fisco de Chile, persona jurídica de Derecho Público, ambos domiciliados en esta ciudad en calle 21 de mayo N°1678, Punta Arenas; solicitó tener por contestada la demanda deducida en autos, y en definitiva, conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas, rechazar dichas acciones indemnizatorias en todas sus partes, o en subsidio, rebajar sustancialmente los montos indemnizatorios pretendidos.

Opuso a la acción deducida, la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la demandante, por cuanto como la propia demandante reconoce, que fue calificada por el Estado de Chile como víctima de prisión política y tortura, recibiendo por tanto los beneficios que diversas leyes de reparación han establecido en su favor.

Alegó que no es posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. En efecto, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior y desde el ámbito de la llamada "Justicia Transicional"; sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria. En efecto, el denominado dilema "justicia versus paz" es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria

tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso “nunca más”. En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema.

Hizo presente que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Recordemos que el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las Comisiones de Verdad o Reconciliación proponen como programas de reparación.

Manifestó que estos programas, en efecto, incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. No es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones, basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de nuestra Ley N°19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. No debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños, se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Citó a la autora Elizabeth Lira, quien manifiesta que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del Presidente Patricio Aylwin, en lo que respecta a la justicia transicional fueron “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados: y (c) el

favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse". En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley N°19.123 que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas".

En lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, indicó que el Ejecutivo, siguiendo el referido Informe de la comisión, entendió por reparación "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena, en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas"; compensación de daños morales y mejora patrimonial, son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias. De esta forma, en la discusión de la ley N°19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación "moral y patrimonial" buscada por el proyecto. La noción de reparación "por el dolor" de las vidas perdidas se encontraba también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal "de indemnización" y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la "responsabilidad extracontractual" del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover "la reparación del daño moral de las víctimas" a que se refiere el artículo 18.

Explicó que asumida esta idea reparatoria, la ley N°19.123 y, sin duda, las demás normas conexas han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

Indicó que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y Reparaciones simbólicas. Por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones habilitará al Tribunal a verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

Respecto de la reparación mediante transferencias directas de dinero, expuso que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destacó que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, quienes sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero, mientras aparecieron otros que abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda; ambas modalidades tendrían fines innegablemente resarcitorios. En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado a diciembre de 2019, por concepto de pensiones, bonos, desahucio (bono compensatorio) y bono extraordinario por Ley N°20.874, el desembolso de \$992.084.910.400.

Razonó que desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que podamos valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio. Pues bien, el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse

simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar. Como puede apreciarse el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Señaló que la demandante ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de la ley N° 19.992 y sus modificaciones. En efecto, dicha ley y sus modificaciones estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados" de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas. Así, se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798 para beneficiarios menores de 70 años; de \$ 1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$ 1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Argumentó que la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley N°19.234 como de la Ley N°19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en servicios de salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. A nivel presupuestario, PRAIS cuenta con un financiamiento de continuidad desde el año 2006. El año 2020, el Programa sostuvo un incremento presupuestario importante, siendo el presupuesto global de M\$6.543.883; este presupuesto se distribuye por Servicio de Salud, permitiendo

cubrir gastos asociados al recurso humano de los equipos de salud PRAIS, equipamiento y para la adquisición de ayudas técnicas o prestaciones que requieren beneficiarios en el extra sistema, focalizando principalmente en la población directamente afectada y en el artículo 10 de la Ley N°19.992. Sin perjuicio de ello, como usuarios del sistema público de salud, los beneficiarios adquieren los derechos establecidos equivalentes para todos los usuarios FONASA; obtienen el derecho de organizarse y participar en los consejos de participación que la ley de Autoridad Sanitaria crea, tanto en los establecimientos como a nivel de la red y secretaría regional, y; adquieren el derecho a organizarse y cooperar con el equipo PRAIS en la difusión del programa y en la promoción del resto de los Derechos Humanos; asimismo, ofrece apoyo técnico y rehabilitación física para la superación de lesiones físicas que sean producto de la prisión política o tortura. Se establecen también beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de educación. A modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario original no hubiese hecho uso de él, podrá postular a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establezca el reglamento de dichas becas. Asimismo, se conceden beneficios en vivienda, correspondientes a acceso a subsidios de vivienda.

En cuanto a las reparaciones simbólicas, explicó que al igual que todos los demás procesos de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a las víctimas de Derechos Humanos se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor, sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral. La doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Así,

Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial, expresa que debe descartarse que sea una reparación compensatoria del modo que se entiende en el derecho patrimonial, “pues aquí resulta de partida absurdo compensar, esto es, fijar una medida igual o equivalente, siendo que el daño mismo a indemnizar no es susceptible de medición exacta. En contraposición, se trata simplemente de una indemnización satisfactiva, esto es, que intenta satisfacer a la víctima. Tomando este verbo justamente en dos de sus acepciones oficiales, según el Diccionario de la Real Academia Española, resulta lo siguiente: a) “Hacer una obra que merezca perdón de la pena debida” y b) “Aquietar y sosegar las pasiones del ánimo”; en esta compleja tarea de entregar una compensación satisfactiva destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como la construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago; el establecimiento del Día Nacional del Detenido Desaparecido; la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos; el establecimiento del Premio Nacional de los Derechos Humanos; la construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los Derechos Humanos; todos ellos unidos, a un sinnúmero de otras obras menores como monolitos, nombres de calles, placas recordatorias, esculturas, pinturas, etc.

De lo expresado concluyó que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. no sólo ha cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional sino que ha provisto indemnizaciones razonables en relación con nuestra realidad económica que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales sufridos a consecuencia de las violaciones a los DDHH. Así las cosas, tanto la indemnización que se solicita en estos autos como el cúmulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar el mismo daño ocasionado por los mismos hechos, en consecuencia los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños no pudiendo, por ello, ser exigidos nuevamente. En este sentido cita fallos Rol N°4753-2001, Rol N°4742-2012 y Rol N°1963-2005 de la Excma. Corte Suprema.

Indicó que órganos internacionales de tanta importancia como la Corte Interamericana de Justicia han valorado positivamente la política de reparación de

violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas; al respecto mencionó el Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile; y agregó que en el mismo sentido el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades.

Refirió que en un documento denominado "Herramientas Jurídicas para Estados Post-Conflictos" (Rule of Law for post-conflicts states) se ha referido expresamente a los programas de reparación. En él se ha reconocido la existencia de un problema al exigir indemnización por la vía de los programas de reparación y paralelamente, ejercer una acción civil, por la vía judicial. Así, indica que una vez que el Gobierno ha hecho esfuerzos de buena fe en crear un sistema administrativo que facilita la entrega de beneficios a las víctimas, permitir a los mismos beneficiarios iniciar litigios contra el Estado genera el peligro de obtener un doble beneficio por el mismo daño. Pero todavía peor, ello pone en riesgo el sistema de reparaciones en su totalidad, puesto que mientras el primer problema puede ser fácilmente solucionado estipulando que no pueden perseguirse beneficios dos veces por la misma violación, el segundo no es fácilmente evitable toda vez que los beneficios obtenidos en los tribunales pueden fácilmente sobrepasar a los de un programa masivo de reparaciones. Esto puede generar un cambio en las expectativas y generalizar una sensación de desilusión con los programas administrativos. Incluso más, este cambio puede ser motivado por casos que seguramente no son representativos de todo el universo de víctimas y que más encima vienen a acentuar las desigualdades sociales entre las víctimas. Así, víctimas más educadas o pertenecientes a las ciudades tienen normalmente una probabilidad más alta de conseguir reparaciones por la vía de la litigación civil que víctimas más pobres, menos educadas, que habitan en el campo o que pertenecen a grupos étnicos, raciales o religiosos marginados. En la misma línea, tal como indica Lira, es precisamente el rechazo a nuevas peticiones de indemnización lo que fortalece los programas de Justicia Transicional. Lo contrario, esto es, dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera

inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Concluyó que estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, y al tenor de documentos oficiales, es que opuso la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizadas la demandante.

En subsidio de la excepción anterior, opuso a la demanda la excepción de prescripción extintiva de la acción indemnizatoria deducida en autos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescrita, se rechace la demanda en todas sus partes.

Expresó que conforme al relato efectuado por la actora, los hechos que sirven de fundamento a su demanda ocurrieron a partir del 10 de Enero de 1974 y hasta el año 1976. Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 27 de Octubre de 2021, igualmente ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil; en consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, en caso el Tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opuso la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la anotada fecha de notificación de la acción civil que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Alegó que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles. "Cuando no se establece la prescripción de un determinado derecho

y tampoco su imprescriptibilidad, ese derecho, de acuerdo con la regla general, es prescriptible”; por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe.

Argumentó que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras. Por eso es que la jurisprudencia ha señalado que “para que un derecho de índole personal y de contenido patrimonial sea imprescriptible, es necesario que exista en nuestra legislación disposiciones que establezcan su imprescriptibilidad”.

Hizo presente que la prescripción es una institución universal y de orden público. Las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil, que la consagran y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Entre estas normas está el artículo 2497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares, la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar que éstas, como lo señala el artículo 547 inciso 2º del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Afirmó que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente conforme lo dispone el artículo 2494 inciso 1º del Código Civil.

Comentó que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio extrapatrimonial, en este caso, a través de un incremento patrimonial del afectado. Toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.

Refirió que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Por ello es posible, sin duda, que la prescripción se

produzca sin que el acreedor haya recibido lo que le corresponda y sin que haya tenido, con ello, intención de remitir la deuda de que se trate. Al acreedor tendrá que reprocharse una grave negligencia, pero, por encima de su interés personal, se impone la necesidad de fijar un término a las acciones. En la práctica, los pocos casos en que la prescripción produce resultados chocantes, ellos no pueden compararse con los infinitos casos en que viene a consolidar y a proteger situaciones regulares y perfectamente justas. La prescripción extintiva, un modo de extinción de las obligaciones, que cumple una función de adquisición y otro de prueba del derecho, es llamada con bastante propiedad por la doctrina como un modo de liberación de las obligaciones, o sea, algo más que su extinción; de esta manera, los planteamientos doctrinarios anteriores permiten concluir que la prescripción, por sobre todas las cosas, es una institución estabilizadora e indispensable en nuestro orden social. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Consignó que la prescripción no es en sí misma, como usualmente se piensa, una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio, en su caso, no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

Agregó que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización; solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción.

Por otro lado, sostuvo que no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa. En la especie, el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

Sobre la prescripción citó jurisprudencia de la Excma Corte Suprema Rol N°10.665-2011, señalando al respecto dicho fallo que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva; que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal; que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto; y que, no obstante, la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado o su detención, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Agregó que existen numerosas sentencias en el mismo sentido, a partir del año 2007, que constituye jurisprudencia uniforme respecto a la materia, y que por lo tanto han acogido la excepción de prescripción en los términos planteados por su parte.

Relató que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté expuesta a extinguirse por prescripción.

Manifestó cómo en forma reiterada se ha planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la más nueva y reiterada jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido

patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece -como se ha dicho- al ámbito patrimonial. Basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción incluso en casos de violaciones a los Derechos Humanos, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

En cuanto a la alegación de la demandante sobre la imprescriptibilidad de la acción para obtener la reparación por los daños reclamados conforme al derecho internacional de los derechos humanos, alegó que su parte se hará cargo de ciertos instrumentos internacionales, aunque sólo algunos de ellos aparecen citados en la demanda, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Citó y reprodujo el artículo 1 letra a y b de la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad”, y señaló que, tal como lo ha reconocido la Excma. Corte Suprema, en ninguno de sus artículos se declara la imprescriptibilidad de las acciones civiles para perseguir la responsabilidad pecuniaria del Estado por estos hechos, limitando esta imprescriptibilidad a las acciones penales.

Refirió que los Convenios de Ginebra de 1949, ratificados por Chile en 1951, se refieren exclusivamente a las acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias, tal como ha resuelto nuestro Máximo Tribunal.

Luego, indicó que la Resolución N°3.074, de 3 de diciembre de 1973, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Principios de Cooperación Internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes contra la humanidad”, se refiere exclusivamente a las

acciones penales para perseguir la responsabilidad de los autores de los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, de modo tal que no cabe extender la imprescriptibilidad a las acciones civiles indemnizatorias.

Expuso que la Convención Americana de Derechos Humanos, sin perjuicio que la aplicación de dicho Tratado no es atingente al caso sub-lite puesto que en la época en que acontecieron los hechos no estaba vigente dado que su promulgación se produjo por Decreto Supremo N°873 publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 1991; ninguna duda cabe que la citada normativa no establece la imprescriptibilidad en materia indemnizatoria. En relación a esta Convención debe destacarse que al efectuar la ratificación, conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Carta Fundamental, Chile formuló una reserva en orden a que el reconocimiento de la competencia, tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se refiere a hechos posteriores a la fecha del depósito del instrumento de ratificación, de 21 de agosto de 1990, o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. Por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile; es decir, el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia.

Afirmó que el planteamiento de su defensa ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país, citando al respecto fallos dictados por la Excma. Corte Suprema, Rol N°1133-06 y N°4067-2006, entre otros.

Estimó que no habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas

contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, razón por lo que solicitó se rechace la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formuló las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido de \$400.000.000 por la demandante.

Con relación al daño moral, hizo presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

En términos generales, manifestó que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso. Tratándose del daño puramente moral, la finalidad descrita no es alcanzable de ninguna manera, así como tampoco puede plantearse que compense en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece cualquiera sea la magnitud de la suma de dinero que se perciba. Por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Consideró que hay que regular el monto de la indemnización, asumiendo la premisa indiscutida que nunca puede ser una fuente de lucro o ganancia, sino que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Por otra parte, advirtió que tampoco resulta procedente invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades. No habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del tercero civilmente responsable en un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, ni más ni menos, con absoluta prescindencia del patrimonio del obligado al pago. En tal sentido, la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral, resulta claramente excesiva teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en esta materia han actuado con mucha prudencia. En este sentido cita jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N°6891-2013.

En subsidio de las excepciones de pago y prescripción de la acciones deducidas, alegó que en la fijación del daño moral por los hechos de autos el Tribunal debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por la demandante de parte del Estado conforme a las leyes de reparación, y que seguirá percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Hizo presente que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Añadió que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que dicha sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. A la fecha de interposición de la demanda de autos a tramitación, o de su notificación, y

mientras no exista sentencia firme o ejecutoriada, ninguna obligación tiene su representado de indemnizar, y por tanto no existe ninguna suma que deba reajustarse. Lo anterior implica que, en casos como el de autos, los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada.

Comentó que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, no procede aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha anterior a la determinación del monto respectivo por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, estimó que el artículo 1551 del Código Civil establece expresamente que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia, citando jurisprudencia en este sentido.

Argumentó que en el hipotético caso que el Tribunal decida acoger la acción de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

Con fecha 23 de marzo de 2022, en folio 17, compareció el demandante evacuando el trámite de réplica, solicitando tenerlo por evacuado en los términos que indica.

Reprodujo cada uno de los conceptos, afirmaciones, planteamientos y acciones contenidas en la demanda de autos, como asimismo las peticiones concretas deducidas en ella.

En cuanto a las excepciones de reparación satisfactiva alegadas por el Fisco, en el sentido que el actor ya habría sido reparado, afirmó que existen múltiples y buenas razones para desechar tal planteamiento.

Señaló que el derecho internacional ha establecido el derecho a reparación integral de toda víctima, y dicha reparación constituye un concepto indiscutido en el sistema internacional de los derechos humanos, remitiéndose a lo señalado en su demanda.

Agregó que las indemnizaciones administrativa y judicial son compatibles, la doctrina de la Excma. Corte Suprema ha asentado el carácter complementario, no

excluyente de ambas indemnizaciones. Los razonamientos seguidos para ello son que: a) Atienden a objetivos diversos y son de distinta naturaleza; b) La Ley N°19.992 que sólo vino a establecer un sistema de pensiones asistenciales, no contempla incompatibilidad alguna; c) No se ha demostrado que la Ley N°19.992 fuera diseñada para cubrir todo daño moral inferido a las víctimas de atentados de derechos humanos; d) Que el Estado asuma su obligación de reparar no significa renuncia o prohibición para que el sistema jurisdiccional declare la procedencia de este tipo de indemnización. Al respecto citó sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N°1092-15.

Añadió que de aceptarse dicha excepción constituiría un cierre a la revisión judicial que podría acarrear responsabilidad internacional al Estado porque la de Corte Interamericana ha reconocido el derecho de las víctimas de acceder a la justicia para solicitar una declaración judicial de responsabilidad estatal para que se efectúe una determinación individual o cuestionar la suficiencia o efectividad de las reparaciones percibidas con anterioridad. En este sentido cita fallo de la Excma. Corte Suprema Rol N°803-2008.

Alegó razones de justicia, pues resulta contrario a todo concepto de justicia que sea el responsable del daño, el Estado y sus agentes, el que fije la cuantía de la reparación, esa es la pretensión oculta tras esta excepción.

Invocó argumentos provenientes del derecho civil que descartan la procedencia de la excepción planteada; en este sentido razonó que desde las reglas del derecho civil, diversos fallos de nuestros tribunales superiores de justicia han concluido que, tratándose de medidas de reparación por violaciones a los derechos humanos, éstas no se condicen con el diseño normativo y presupuestos legales del derecho privado, particularmente, los relativos al pago, señalando al respecto fallo Rol N°23441-14 de la Excma. Corte Suprema.

Afirmó la existencia de reconocimientos por parte del Estado de Chile que la reparación integral de las víctimas es un tema todavía pendiente en nuestro país, mencionando fallo en causa Rol N°180-2019 de la Iltrma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas.

En cuanto a la excepción de prescripción extintiva, argumentó que las normas del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad derivada de crímenes de lesa humanidad.

Explicó que son 2 las premisas presentes en la argumentación del Consejo de Defensa del Estado: 1) Que las acciones reparatorias, como la intentada en autos, pertenecen al ámbito patrimonial, encontrándose por tanto regidas por el Derecho Civil; y 2) Que en el derecho civil se encuentra el estatuto general de responsabilidad. Sin embargo, ambas premisas se encuentran actualmente superadas; en efecto, en el estado actual del debate, no existe mayor discusión, a nivel doctrinario ni jurisprudencial, en cuanto a que las acciones reparatorias, por su especial ámbito, tienen una naturaleza internacional o humanitaria, no patrimonial y que esta clase de delitos se sujeta a un régimen autónomo de responsabilidad estatal.

Alegó que es posible encontrar diversos fallos en que nuestra excelentísima Corte Suprema se ha manifestado explícitamente contraria a la aplicación del código civil a la responsabilidad civil derivada de crímenes de lesa humanidad, argumentando para ello desde la especificidad propia de la materia, citando a modo de ejemplo los roles N°2918-2013 y N°34111-19 de dicha Corte.

Expresó que los delitos de lesa humanidad se sujetan a un régimen autónomo de responsabilidad estatal. Tratándose de violaciones a los Derechos Humanos, como es el caso sub lite, la responsabilidad del Estado, y más específicamente, la obligación indemnizatoria del mismo, no surge del derecho civil, sino de la interacción normativa entre reglas internas, fundamentalmente de derecho constitucional, y reglas internacionales contenidas en diversas fuentes de Derecho Internacional Público, esto último posibilitado por la remisión que hace el artículo 5 de la Constitución Política de la República.

Mencionó la utilización de reglas interpretativas desarrolladas fundamentalmente por el Derecho Internacional, como son los principios de interpretación de buena fe, principio "pro homine" o "favor libertatis", interpretación evolutiva, equidad como criterio de integración e interpretación judicial, y las reglas de ius cogens, como fuente normativa y como elemento para situar las reglas convencionales de Derecho Internacional.

Estimó que el régimen autónomo de responsabilidad estatal que desde el año 2015, ha venido siendo reconocido consistentemente por la jurisprudencia de nuestra excelentísima Corte Suprema, entre otros, en Rol N°31.711-17 y Rol N°34.111-19.

Arguyó que de la existencia de este régimen autónomo de responsabilidad estatal se siguen determinadas consecuencias: una de ellas es que la responsabilidad del Estado que surge por violaciones a los derechos humanos no se extingue por el transcurso del tiempo.

Estimó que la responsabilidad, tanto civil como penal derivada de la comisión de crímenes contra la humanidad, se sujeta a un mismo estatuto de imprescriptibilidad integral, que tiene su fuente en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que postula que todo daño acaecido en el ámbito de estos derechos, ha de ser siempre reparado integralmente, con arreglo a las normas de derecho internacional convencional, o en su defecto, del derecho consuetudinario, de los principios generales o aún de la jurisprudencia emanada de tribunales de la jurisdicción internacional. Tanto el sistema universal como el interamericano reconocen este derecho a la reparación integral.

Explicó que en el ámbito del sistema de protección universal de los derechos humanos, el derecho de las víctimas a obtener reparación, constituye un principio general del derecho internacional, incluyendo en su mención la historia de consagración del mismo.

Destacó el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde se establece uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados, puesto que cuando ha existido violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar la acción con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Concordando con lo anterior, citó Sentencia de la Excma. Corte Suprema Rol N°31.711-17.

Por lo anterior, argumentó que no resultan aplicables las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles a la resolución del asunto, al estar éstas en abierta contradicción con las referidas reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, tal como se menciona en Rol N°34.111-19 de la Excma. Corte Suprema, donde se recoge una idea común en el Derecho internacional Humanitario y en el Derecho Internacional de Derechos Humanos, consistente en que las normas basales del sistema son consuetudinarias, de tal forma que las reglas convencionales sólo

vienen a consagrar imperativos jurídicos plenamente vigentes, que buscan en su positivización su mejor protección, mas no su establecimiento.

Luego, mencionó que las normas de derecho internacional que consagran el derecho de las víctimas a una reparación integral constituyen un límite en sí mismas, citando en dicho sentido Rol N°31.711-17 de la Excma. Corte Suprema.

Expuso que la prescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad infringe los artículos 26, 27 y 53 de la Convención de Viena, esta última disposición en relación a las reglas imperativas de derecho internacional o "IUS COGENS". Infringe el principio internacional que los tratados deben cumplirse de buena fe, contenido en el artículo 26 de la Convención de Viena; el principio de derecho internacional contenido en el artículo 27 de la Convención de Viena, el que previene que los Estados no pueden invocar su derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, en la especie la de establecer responsabilidades, que es justamente la hipótesis en que se pretende la aplicación de las reglas de prescripción contenidas en el Libro Tercero título XXXV del Código Civil, evitando de esta forma al Estado de Chile cumplir la obligación reparar una violación grave del derecho internacional, tratándose de delitos de lesa humanidad. Dejaría de aplicar el artículo 53 de la Convención de Viena, el cual incorpora al derecho convencional las reglas imperativas de derecho internacional o "IUS COGENS": "es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general". Para los efectos de la Convención de Viena, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional e Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

Argumenta que el principio de buena fe -junto al pacta sunt servanda- suele ser invocado para fundar la obligatoriedad del derecho internacional y la integración normativa de sus fuentes, como fuera mencionado en el fallo Rol N°5436-2010 de la Excma. Corte Suprema. Del mismo modo nuestro máximo Tribunal ha recurrido al concepto de justicia para justificar la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de crímenes de lesa humanidad, como se puede observar en Rol N°34111-19.

Manifestó que el concepto de justicia ha sido empleado en diversos sentidos: 1) Para afianzar la necesidad restaurativa de la reparación; 2) Para rechazar la aplicación del Código Civil y 3) Para traer a colación las reglas del Derecho Internacional. Ello, a su juicio, importa que la Corte Suprema vea en la justicia tanto un criterio orientador como una herramienta de integración jurídica, mencionando al respecto los Roles N°2080-2008 y N°3841-2012 de la Excma Corte Suprema.

Agregó que otro argumento empleado para descartar la aplicación prescripción extintiva, presente en la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, es el “principio de congruencia” en virtud del cual se afirma el carácter discriminatorio de la distinción entre acciones penales imprescriptibles y acciones civiles prescriptibles. Si de un mismo hecho nacen ciertas acciones, darles un tratamiento distinto no guarda coherencia, por lo tanto, si de los crímenes contra la humanidad derivan acciones, civil y penal, ambas deben tener la misma suerte, es decir, se excepcionan de la prescripción extintiva. (Rol N°1092-15 de la Excma. Corte Suprema).

Consideró que la excepción interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, representante del Fisco de Chile, contradice abiertamente el expreso reconocimiento de su responsabilidad internacional efectuado por el Estado Chileno durante la tramitación del Caso Órdenes Guerra y otros Vs Chile seguido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Consignó el hecho que diversas autoridades y representantes del Estado Chileno han defendido ante organismos internacionales la imprescriptibilidad de la acción civil indemnizatoria, citando fallo de la Iltrma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas Rol N°180-2019.

Alegó que al contrario de la jurisprudencia citada por el Consejo de Defensa del Estado, anterior al año 2014, la jurisprudencia constante y consistente, a partir del año 2015, ha venido reconociendo el carácter de imprescriptible de las acciones civiles derivadas de los crímenes de les humanidad, mencionando en este punto una serie de fallos de la Excma. Corte Suprema que sustentan su afirmación.

Respecto de las alegaciones del Fisco en cuanto al daño e indemnización reclamada, se remitió a lo señalado en la demanda en cuanto a la procedencia del daño moral en este tipo de ilícitos.

Consideró que no corresponde acceder a la solicitud de su contraparte relativa a que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales. Reiteró que la indemnización civil y la administrativa son compatibles, no excluyentes.

El día 31 de marzo de 2022, en folio 22, compareció la parte demandada evacuando el traslado para duplicar. Solicitó el rechazo de la demanda en todas sus partes, con costas.

Señaló que reproduce íntegramente y ratifica en su totalidad el escrito de contestación de la demanda, por lo que reiteró todas y cada una de las alegaciones, excepciones y defensas contenidas en dicho escrito.

Con fecha 14 de abril de 2022, folio 27 se recibió la causa a prueba, fijándose los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos materia de acreditación por las partes.

El día 19 de julio de 2022, folio 54 se citó a las partes para oír sentencia.

El día 08 de agosto de 2022, folio 56, se dictó medida para mejor resolver, la que se tuvo por cumplida el día 2 de septiembre del año en curso, tal como consta en folio 59.

Considerando:

Primero: Tal como se dijo con anterioridad, el conflicto de relevancia jurídica entre parte traído al conocimiento del tribunal estriba en que Pablo Andrés Bussenius Cornejo en representación convencional de Cecilia Beatriz Fanjul Lizarralde interpuso demanda ordinaria en juicio de hacienda solicitando la indemnización de los perjuicios por daño moral, en contra del Fisco de Chile, persona jurídica de derecho público, representado por el Procurador Fiscal Dagoberto Reinuava del Solar, abogado, ya individualizado. Solicitó que se acoja la demanda en todas sus partes, condenando al demandado a pagar una indemnización por el daño moral ascendente a la suma de \$400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos) o la suma que el Tribunal estimara pertinente por concepto de daño moral, más intereses, reajustes legales desde que la sentencia cause ejecutoria, con costas.

Funda su pretensión en los argumentos reseñados en la expositiva, los que se dan por reproducidos para evitar reiteraciones inconducentes.

En folio 13, el demandado Fisco de Chile, representado por el abogado procurador fiscal Claudio Benavides Castillo, contestó la demanda. Solicitó que conforme a las excepciones, defensas y alegaciones opuestas en dicho escrito, se rechace la acción deducida en todas sus partes, con costas.

Segundo: La parte demandante acompañó los siguientes antecedentes y medios probatorios:

En folio 39:

1. Copia Informe Servicio Médico Legal, Protocolo de Estambul N°1685-2016 de Cecilia Beatriz Fanjul Lizarralde, de fecha 22 de diciembre de 2016, firmado por Jacqueline Riquelme Caniuñir, Psicóloga Clínica y Forense, Departamento de Salud Mental – SML.
2. Copia Informe Servicio Médico Legal N°2953-2016, examen físico médico, Protocolo de Estambul N°61 DE Cecilia Beatriz Fanjul Lizarralde, de fecha 05 de enero de 2017, firmado por Dra. Patricia Negretti Castro, Médico Perito Forense.
3. Copia de certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de fecha 17 de marzo de 2022, a nombre de Cecilia Beatriz Fanjul Lizarralde, firmado por Cristian Figueroa Fuentealba, Jefe Sede Regional de Magallanes y Antártica Chilena, Instituto Nacional de Derechos Humanos.
4. Impresión digital nota Diario “La Prensa Austral” de fecha 08 de junio de 2022, titulada “Más de 20 ex presas políticas magallánicas se querellaron por secuestro, tortura y violación”.
5. Copia de portada y páginas 1 a 13 de Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
6. Copia Capítulo V: Métodos de tortura: Definiciones y Testimonios de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, pág. 225 a 250.
7. Copia documento titulado “Capítulo VII – Consecuencias de la prisión política y la tortura”.
8. Copia Nómina de personas reconocidas como víctimas al 28 de noviembre de 2004 de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
9. Copia de Carta conductora e Informe Médico solicitado en causa Rol C-15330-2016 del 9° Juzgado Civil de Santiago al Instituto de Salud Mental y

Derechos Humanos, de fecha agosto de 2016; misiva firmada por Elena Gómez Castro R.C.M. 9726-8.

10. Copia "Informe en términos Generales sobre las secuelas dejadas en el plano de salud mental relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar", emitido en caso D. Hernán Díaz Jiménez, firmado por Paula Hinojosa Oliveros, Psicóloga, Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos – Prais, Servicio de Salud Metropolitano Norte.

11. Copia Norma Técnica para la atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990, págs. 30 a 50.

12. Copia Sentencia de fecha 29 de noviembre de 2018, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile.

13. Sentencia dictada en causa Rol C-682-2016, autos caratulados "Provoste con Fisco de Chile" del 1º Juzgado de Letras de Punta Arenas, de fecha 30 de noviembre de 2017.

14. Sentencia dictada en causa Rol C-1320-2018, autos caratulados "Cárcamo con Fisco de Chile, Consejo de Defensa del Estado", del 1º Juzgado de Letras de Punta Arenas, de fecha 18 de junio de 2019.

15. Sentencia dictada en causa Rol 499-2017, autos caratulados "Guelet con Fisco de Chile", del 3º Juzgado de Letras de Punta Arenas, de fecha 26 de agosto de 2019.

16. Copia de sentencia dictada en causa Rol N°803-2008, autos caratulados "Valencia Oyarzo Eli con Fisco de Chile", del 18º Juzgado Civil de Santiago, de fecha 07 de enero de 2013.

17. Copia sentencia dictada en causa Rol N°1092-15 de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de fecha 14 de septiembre de 2015.

18. Sentencia de sentencia dictada en causa Rol N°129-2020 Civil de la Iltrma. Corte de Apelaciones de Punta Arenas, de fecha 13 de octubre de 2020.

19. En folio 46 rinde prueba testimonial, declarando el testigo Baldovino Erasmo Gómez Alba, profesor, domiciliado en calle Uruguay N°01649 de esta ciudad, quien interrogado al tenor del punto uno de la resolución que recibe la

causa a prueba, expresó que la demandante sufrió violación de sus derechos humanos, privación de libertad y tortura por razones políticas por parte de agentes del Estado de Chile durante el periodo comprendido entre los años 1973 y 1990.

Explicó que es de público conocimiento dentro de la Comunidad de Derechos Humanos y Presos Políticos, a partir del mismo septiembre de 1973. Lo que le consta es que ella fue detenida al menos una o dos veces por ser militante de la juventud Socialista en esos tiempos, en esa época ella estaba estudiando en la 5ta. Región, allá fue detenida y la relacionaron sentimentalmente con Eduardo Ramírez, quien era el Presidente de la Juventud Socialista en esa época, buscado intensamente incluso con publicaciones en los diarios, con poster en la frontera y finalmente no fue detenido, ella si fue detenida en Valparaíso, después la trasladaron en un barco a Punta Arenas, y estuvo detenida y secuestrada en el Regimiento Ojo Bueno, que queda fuera de la ciudad, junto con muchas mujeres. Sufrió torturas como todas las mujeres y los hombres que estuvieron detenidos en el mismo Regimiento, en el Centro de Torturas de Colon N°636, que era el ex Hospital Naval de la Armada, en otro recinto que tenían al lado de Listo, que ahora es una especie de Clínica y en la casa del Deportista. Todo lo anterior le consta porque cuando él regresó de Dawson en mayo de 1974, permaneció detenido en los camarines del Estadio Fiscal de Punta Arenas, donde se encontró con varios de los compañeros de la juventud socialista que fueron torturados en esos lugares juntos con otras compañeras, entre ella Cecilia.

Repreguntado sobre qué hechos y circunstancias constituyen su detención durante el periodo de 1973 y 1990, respondió que continuó la persecución y el daño al no poder hacer una vida normal y no poder continuar con sus estudios, tampoco Cecilia. Cuando ella salió de detención, quiso retomar su vida normal y sus estudios y no se lo permitieron, porque era parte de la política represiva, finalmente Cecilia un par de años después tuvo que salir al exilio, porque no tenía futuro y permanentemente era perseguida, y para ella era peor porque era hija única y sus padres ya mayores.

Repreguntado sobre si sabe a qué edad fue detenida doña Cecilia, contestó que cree que 18 o 19 años, porque ella ya estaba en la Universidad y en esa época era menor de edad.

Repreguntado para que aclare, cuantas veces fue detenida doña Cecilia, manifestó que lo que él conoce y recuerda, fueron dos veces, las dos veces en Valparaíso, y en la segunda oportunidad fue trasladada en un Barco a Punta Arenas, y cuando fue llevada a Ojo Bueno, recién pudieron saber de ella, porque no se sabía nada, ni donde estaba.

Repreguntado sobre cuáles fueron las circunstancias en las cuales tomó conocimiento de la detención de doña Cecilia, relató que recuerda en dos momentos, él estuvo detenido en el Regimiento Pudeto, desde septiembre a diciembre de 1973, y ahí se enteró por un compañero, Hernán Biott, que Cecilia estaba detenida. Después en mayo de 1974, cuando volvió de Dawson y siguió detenido en los camarines del Estadio Fiscal, los compañeros de la juventud socialista entre los que recuerda, Ricardo Andrade, Hernán Cárdenas, un compañero de apellido Águila, le comentaron que Cecilia estaba nuevamente detenida en el Regimiento de Ojo Bueno y que a varios los habían interrogado y torturado junto con ella.

Repreguntado para que aclare con respecto a la época en que doña Cecilia se va al exilio, refirió que ella sale en el año 1976 más o menos, ella logra salir con Hernán Biott, que estaba condenado en Consejo de Guerra y le conmutaron la pena por extrañamiento; ella creo que se casó con él para poder salir, estuvo muchos años afuera porque no la dejaban entrar, logró volver a ver a sus padres más o menos en el año 1985 o 1986.

Interrogado al tenor del punto dos de la resolución que recibe la causa a prueba, indicó que es efectivo que los actos imputados a la demandada irrogaron perjuicios a la demandante.

Aseguró que fue un grave daño y perjuicio, como dijo anteriormente, no pudo seguir estudiando, y los estudios han comprobado que la tortura provoca un daño de manera permanente, el hecho de la obligación de salir del país, no poder estar con sus padres, de apoyarlos, el grave desarraigo. Cecilia después de estar en Estados Unidos, se fue a Nicaragua, de hecho hasta el día de hoy está en Nicaragua.

20. Continuando con la prueba testimonial, en el mismo folio 46, depone la testigo Vilma de Lourdes Mansilla Revens, contador auditor, domiciliada en calle Carlos Condell N°0599 de esta ciudad, quien interrogada al tenor del punto de

prueba N°1 de la resolución que recibe la causa a prueba indicó que es efectivo que la demandante sufrió violación a sus derechos humanos, privación de libertad y tortura por razones políticas, por parte de agentes del Estado de Chile, durante el periodo comprendido entre los años 1973 y 1990.

Expuso que conoció a Cecilia, fueron compañeras de curso en 1° Medio en el Liceo de Niñas y además eran compañeras de Partido, simpatizaban con la Juventud del Partido Socialista, y con esta relación esporádica, supo por ella misma que fue sometida a torturas. Ella estudiaba Ingeniería Agrónoma en la Universidad de San Felipe y fue detenida el mismo día 11 de septiembre de 1973, estuvo detenida y sometida a tortura desde el mes de septiembre hasta mediados de octubre más o menos. Después de eso ella viajó a Punta Arenas, porque no se sentía segura donde estaba además que tenía a sus papás en esa ciudad, ella era hija única y sus padres muy ancianos; cuando llegó acá solo pudo estar 4 o 5 días, ya que la contactaron unos compañeros, sugiriéndole que se fuera de Punta Arenas, porque ella no estaba segura acá, la relacionaban sentimentalmente con un dirigente del partido socialista que estaba siendo buscado vivo o muerto. De ahí ella se regresó a la 5ta. Región, siendo nuevamente detenida en el mes de enero de 1974, en ese lapso la mamá viajó a buscarla pues ella se encontraba desaparecida y no se sabía nada de ella, y fue de nuevo sometida a tortura y llevada a distintos recintos, hasta que en el mes de febrero la llevan al barco de la Armada, el Aquiles, y la trasladan a Punta Arenas en un viaje que duró alrededor de 12 días, donde venía confinada en un camarote que no era de pasajeros sino que destinado a transportar abastecimientos. Luego la llevan al Regimiento Blindado Ojo Bueno, que queda alrededor de 15 Km. De Punta Arenas, hacia el lado Norte, y ahí la tienen confinada, en un principio en un lugar apartado del resto de las prisioneras y de ahí la sacan de ese recinto y la llevan a la casa del deportista y a la Clínica 21 de Mayo, donde es nuevamente torturada. Después de unos días se enteraron que estaba en el mismo recinto que ellas estaban, pero tenía prohibición de tener contacto con las demás prisioneras. Lograron juntarse en el baño y conversar con ella, donde les contó lo que le había pasado; dentro de las torturas, les comentó que en la casa del deportista la sometieron a una hipnosis y las preparó para que si les ocurre lo mismo hicieran como si hubieran logrado hipnotizarlas, lo que efectivamente en su caso, pasó, a ella la sacaron y

llevaron a la casa del deportista para hipnotizarla, pero no lo lograron por estar prevenida por Cecilia; simuló estar hipnotizada y al creer que estaban hipnotizadas, los agentes del Estado, las sometían a abusos sexuales, las toqueteaban por todos lados y en el fondo les hacían cosas estúpidas para que ellos se diviertan. Cecilia estuvo alrededor de 2 semanas, teniendo un contacto esporádico en el baño y de ahí se enteró que ella se había ido exiliada a Estados Unidos, porque le había sido insostenible seguir viviendo en Chile, se sentía muy perseguida. Esa decisión fue muy terrible para ella, ya que tuvo que dejar a sus padres ya muy mayores y ella como hija única era muy regalona.

Interrogada al tenor del punto dos de la resolución que recibe la causa a prueba, relató que es obvio que los actos imputados al demandado irrogaron perjuicios a la actora, la demandante estaba estudiando para ser una profesional, no lo pudo seguir haciendo, tuvo que abandonar un hogar cómodo en donde sus papás le daban todo porque tenían una muy buena situación económica, abandonar su país llegando a un lugar que el idioma no lo dominaba pues ella no hablaba inglés, comenzar una vida nueva en otro lado, totalmente desconectada de sus raíces.

Interrogada al tenor del punto tres de la resolución que recibe la causa a prueba, narró que el daño que se causa, no tiene precio, es incalculable en términos financieros, porque además ella era una niña que no tenía ni 20 años, que estaba empezando su vida, y su vida se terminó y empezó otra.

Repreguntada la testigo para que precise a qué se refiere con la frase "el daño que se causa", manifestó que hay un daño psicológico que cuesta mucho superar todos los traumas que se obtienen producto de las torturas, no alcanza la vida para salir de ese daño que se sufre y más cuando eres niña, cortar todos los planes que se tenían para su vida, porque ya no eres dueña de tu destino, no puedes manejar tu vida, no puedes planearla. En el caso de Cecilia se vio obligada a comenzar otra, y hacer lo que se pueda y no lo que se quiere.

21. A continuación declara la testigo Patricia Blanca Zenaida Pérez Zúñiga, Secretaria, domiciliada en calle Señoret N°1444 de esta ciudad; y al tenor del punto 1 de la resolución que recibe la causa a prueba expresó que es efectivo que la demandante sufrió violación a sus derechos humanos, privación de libertad

y tortura por razones políticas, por parte de agentes del Estado de Chile durante el periodo comprendido entre los años 1973 y 1990.

Mencionó que sufrió tortura y violación a los derechos humanos, lo que le consta porque se conocen desde niñas, y el vínculo es que sus padres se conocían por el trabajo, ellos siempre se veían y cuando vino el Golpe Militar, se enteraron por su papá que Cecilia había sido detenida en la 5ta. Región; ella estudiaba Agronomía en la Universidad y lo que más les llamó la atención es que la trajeron detenida desde Valparaíso a Punta Arenas en un buque de la Armada denominado Aquiles, era una embarcación que no era de pasajeros. Lo que sabe es que tuvo maltrato en su detención y en el viaje. Cuando llegó acá fue trasladada al Regimiento de Ojo Bueno, no sabe cuánto tiempo permaneció detenida, después que ella salió la vio solo una o dos veces, con mucho susto por todo lo que había pasado, sentía temor que la detuvieran en cualquier momento. Después regresó al Norte a Santiago, tiene entendido que no terminó su carrera universitaria, después se fue al extranjero a Estados Unidos, ella se casó con un ex prisionero político, Hernán Biott, que era de Punta Arenas, se casó con él para poder salir del país, tiene entendido que en la actualidad ella tiene su residencia en Nicaragua, se separó de Hernán, tiene 3 hijos, una hija doctora y dos hijos varones.

Repreguntada si sabe qué edad tenía la demandante al momento de su detención, comentó que tiene que haber tenido entre 18 y 20 años, porque estaba en la Universidad y en ese tiempo la mayoría de edad era a los 21 años, por lo tanto ella era menor de edad cuando la detuvieron.

Repreguntada sobre qué pasó con los padres de Cecilia con motivo de esta detención, sostuvo que para los padres fue algo muy doloroso, porque para don Gilberto y la Sra. Violeta, su hija Cecilia que era única, era todo para ellos, estudió en un buen colegio, eran muy apegados como familia, de hecho, sobre todo para él, que era su reglona, le costó mucho que se fuera a estudiar fuera de la Región, y cuando se enteraron de su detención, primero la desesperación que no sabían nada de ella, donde estaba, la mamá viajó a la 5ta. Región para saber de ella y después Cecilia fue trasladada a Punta Arenas, con todo ese sufrimiento para su familia y para la misma Cecilia, el miedo para don Gilberto era que en cualquier momento podían volver a llevarse a su hija.

Interrogada al tenor del punto dos y tres de la resolución que recibió la causa a prueba, afirmó que los actos imputados al demandado irrogaron perjuicios al demandante, porque ella fue detenida y estuvo en diferentes centros de detención, hay un daño permanente; sufrió vejaciones, tortura, el sufrimiento de la familia, dejó de estudiar, perdió su carrera universitaria, le cambió su vida. En cuanto al monto, cree que no hay monto que repare el daño psicológico, Cecilia no vio morir a su madre doña Violeta, y su padre quedó solo, ella se lo llevó a Nicaragua, todo esos sufrimientos son irreparables, no hay monto que los cubra y pueda reparar un dolor así.

22. Finaliza su prueba testimonial de folio 46, con la declaración de la testigo Magda Ilia Ruiz Méndez, psicóloga y Analista Química, domiciliada en calle Latorre N°334 de esta ciudad, quien interrogada al tenor del punto N°1 de la resolución que recibe la causa a prueba, explicó que es efectivo que la demandante sufrió violación a sus derechos humanos, privación de libertad y tortura por razones políticas, por parte de agentes del Estado de Chile, durante el periodo comprendido entre los años 1973 y 1990.

Refirió que es testigo de eso porque estuvieron en el mismo centro de detención cuando a ella la trajeron desde Valparaíso en calidad de detenida en el buque Aquiles y llegó al Regimiento de Ojo Bueno donde ella estaba presa; ahí llegó ella más o menos en el mes de febrero de 1974. Fue muy sorpresivo verla, porque lo último que sabía de ella era que estaba en el Norte del país estudiando, y verla de repente en el mismo centro de detención fue sorpresivo. Lo anterior le consta, porque a ella la pusieron en otra pieza, pues en la que estaban todas las del partido socialista y partido comunista era una pieza grande; había otra pieza chica en donde estaban las prisioneras del partido comunista, a ella la pusieron en esa pieza y tenía prohibición de conversar con las demás. En esa pieza estaban las personas de mayor edad. En el fondo era porque ella tenía prohibición de conversar con las del partido socialista, pero como había un baño común, trataban de encontrarse en el baño; por esa razón supo de todo lo que ella había pasado, en cuanto a la tortura y a la violación de los derechos humanos, porque ella había sido secuestrada en Valparaíso; ahí fue donde ocurrió lo más terrible, ya que estuvo más de 2 meses en el recinto de la armada conocido como centro de tortura Silva Palmer donde sufrió todo tipo de tortura, de índole sexual, violencia

sexual, violaciones, aplicación de electricidad, golpes, privación de alimentación, privación de acceso a baño y fue interrogada constantemente con todo ese tipo de tortura. Al llegar al Regimiento de Ojo Bueno, debe haber pasado un día y la sacaron para un interrogatorio y ahí se volvieron a juntar en el baño donde le contó lo que le pasó en el interrogatorio porque pesaba que a también la llevarían a interrogar y harían la misma tortura.

Expuso que lo que más le preguntaban era por una persona que pensaban era su pareja hasta esa época del 11 de septiembre de 1973, él era el presidente de la juventud socialista acá en Magallanes y era buscado vivo o muerto, Eduardo Ramírez, la interrogaban y a ella siempre le preguntaban por él, porque era su amiga, y ese era el motivo por el que las torturaban a las dos, en esa fecha él ya había salido de Chile.

Agregó que por eso a le consta que ella fue torturada acá en Punta Arenas, en el Recinto de la Clínica del Ejército de calle 21 de mayo, porque les aplicaron el mismo tipo de tortura, que no fue el mismo tipo de antes, de violencia física y sexual, de electricidad, golpes; sino que trataron de hipnotizarlas, y la persona que hipnotizaba era Giovanni Carraro, que era laico en ese momento y que ahora es Sacerdote, porque cuando entraba en la Clínica de 21 de mayo, lo vio porque iba sin venda y él había sido su profesor de Filosofía en el Liceo.

Reiteró que por eso puede dar fe de todo lo que ella pasó, de todas las vejaciones, sus gritos desgarradores en la noche los escuchaban desde su pieza, por las pesadillas y eso perdura hasta el día de hoy, porque en ocasiones en que ella ha venido a Punta Arenas, le ha comentado que su familia se despierta asustada con sus gritos nocturnos.

Repreguntada la testigo sobre qué pasó con la demandante con posterioridad a su liberación, respondió que tiene entendido que ella viajó a Valparaíso y ahí, no supo mucho más de ella, porque cuando salió en libertad, la relegaron a Santiago y después la expulsaron de Chile. Con el tiempo se enteró que ella también había salido al exilio y en ese tiempo perdieron contacto por muchos años, ella estaba en Dinamarca y la demandante en Estados Unidos; después supo que ella se fue y radicó en Nicaragua donde vive hasta el día de hoy con muchos problemas de salud y económicos, ella también estudió psicología,

pero con el actual gobierno Nicaragüense se le han cerrado todas las puertas para que pueda ejercer su profesión.

Repreguntada sobre qué edad tenía doña Cecilia al momento de su detención y si tuvo conocimiento de alguna intervención por parte de su familia con ocasión de la detención, manifestó que al momento de la detención todavía era menor de edad porque en esa época la mayoría de edad era a los 21 años. Ella era hija adoptada y tenía una muy buena situación económica y familiar y sus papás eran muy mayores y ella era su hija regalona, lo era todo para ellos, así que cuando a ella la detienen, otras personas que habían sido detenidas con ella le avisan a sus papás lo que había pasado y su mamá viaja a la 5ta. Región para investigar donde estaba su hija y gracias a eso pensamos que no fue una desaparecida más. Tiene entendido que la mamá vino viajando a todos los puertos en que recalaba el buque para ver si venía su hija hasta que llegó a Punta Arenas.

Interrogada al tenor de los puntos dos y tres de la resolución que recibe la causa a prueba, expresó que es efectivo que los actos imputados al demandado irrogaron perjuicios a la demandante, porque ella estaba estudiando, era una persona muy inteligente e iba a sacar su carrera de Agronomía y Veterinaria era una combinación de carreras, lo que se vio truncado con su detención, podría haber sido una profesional exitosa y haber desarrollado su vida donde ella hubiese elegido vivir y no obligada por las circunstancias. Ahora ella no se siente en condiciones de volver a vivir a Chile, porque acá no tiene donde vivir, sus padres ya fallecieron y ella allá tiene hijos y nietos, eso también es parte del daño ocasionado, la familia se disgregó. En cuanto al monto de los perjuicios es incalculable, porque a ella le truncó la vida, ella ahora se encuentra en Nicaragua con serios problemas económicos y no puede volver porque debido a su edad tampoco podría trabajar en Chile o le sería muy difícil encontrar trabajo.

Repreguntada sobre si tiene conocimiento de algún tipo de daño debido a la detención ilegal y secuestro, declaró que sabe que ella sufre de constantes dolores de cabeza, ansiedad, depresión diagnosticada, terrores nocturnos, constantes pesadilla relacionadas con la tortura, producto de esa ansiedad ella sufre de obesidad mórbida.

La parte demandada acompañó a estos autos los siguientes antecedentes y medios probatorios:

En folio 20 incorporó:

23. Copia Oficio Ord. DSGT N°4792-6087, de fecha 28 de marzo de 2022, dirigido desde Jefe de Departamento Secretaría General y Transparencia Instituto de Previsión Social a 3° Juzgado de Letras de Punta Arenas.

Luego, en folio 47, acompañó:

24. Copia Oficio Ord DSGT N°4792-4111, de fecha 16 de noviembre de 2021, dirigido desde Jefe (S) Departamento Secretaría General y Transparencia Instituto de Previsión Social a Abogado Procurador Fiscal de Punta Arenas, Consejo de Defensa del Estado.

25. En folio 57, se acompañó como medida para mejor resolver el listado de Prisioneros políticos y torturados.

Tercero: Con el mérito de la prueba rendida en la causa, valorada legalmente, se tienen por acreditados los siguientes hechos:

a) El día 11 de septiembre de 1973, Cecilia Beatriz Fanjul Lizarralde fue detenida y sometida a torturas, siendo liberada a mediados del mes de octubre de 1973, en la Región de Valparaíso, conforme se desprende del medio de prueba N° 20, atento a lo preceptuado en el artículo 384 N° 1 en relación con el artículo 426, ambos del Código de Procedimiento Civil;

b) El día 10 de enero de 1974, la demandante fue detenida por segunda vez en la casa de su pololo en Quilpué, allí llegan dos camiones y una especie de camioneta jepp, con personal uniformado del Belloto (navales) y armados. Fue detenida junto a la madre y hermana de su pololo. De forma violenta es subida a la camioneta con una capucha en la cabeza y sentada con la cabeza gacha. Es trasladada al Fuerte Silva Palma Valparaíso, es bajada, sube una escalera a culatazos y patadas. Al llegar a una especie de cancha, plana, es llevada a una sala de interrogatorio que estaba dividida por partidos políticos, cada sala tenía un equipo de 4 personas, la suya eran 3 hombres y una mujer. Es sentada en una silla y previamente es golpeada con el puño, y con las manos la empujaban y la amedrentan violentamente. Fue golpeada estando sentada, se le puso anillos de metal en los dedos de las manos y se le aplicó corriente eléctrica.

Estuvo detenida 45 días aproximadamente, y era requerida desde Punta Arenas por cargos muy graves. En su detención, al inicio, estuvo en una celda sola, oscura, con cucarachas, ratones y con un hoyo para sus necesidades.

En los interrogatorios había una mujer que lograron identificar, que la tocaba lujuriosamente, era una mujer de la juventud socialista, la conoció en la sede de Valparaíso. Estaba con venda que a veces se corría y pudo ver zapatos, pelo o parte de la ropa. Se llamaba "Cecilia".

Fue víctima de abuso sexual cuando niña, así es que sufrió mucho cuando fue tocada en sus senos por esta mujer. En esos momentos escuchaba las risas de los varones. A los 45 días es llevada en un buque de guerra "AP 47 Aquiles" a Punta Arenas. A los 4 días entró el que lavaba la ropa y quiso violarla, entra casi semi desnudo. Ella saltó el camarote de arriba y de allí saltó a la otra cama y salió corriendo y gritando, sale el cocinero y agarra y detiene al lavandero y lo apresaron.

En una oportunidad, una noche entró uno de los guardias, estando sin venda, se subió al camarote de al lado, ella se tiró al suelo y se golpeó el hombro y se le tiró encima, empezó a gritar. Al frente estaba la celda de los hombres y empezaron a gritar y el hombre se fue.

En Punta Arenas fue entregada a los militares ellos empezaron a golpearla allí mismo, porque su padre estaba esperándola en la puerta.

Es subida a una camioneta, allí la tiran al suelo y le ponen un pie en la cabeza. Llega a Ojo Bueno, en regimiento donde estaban las otras compañeras. La vendan para entrar, la meten a un frizear grande funcionando, sin la venda y con las manos libres.

Al día siguiente, la van a buscar y le dan dos pastillas a tomar, por personal civil y eran militares pero no conscriptos. Es derivada a la "Casa del Deportista" que queda en la orilla del mar, es golpeada con los puños y los pies. El segundo día también durmió como 7 días. Le dijeron que llevan a un médico y le dijeron que iban a iniciar una nueva técnica de interrogación. Era hipnosis.

Al tercer día abren un paño con muchas agujas rectas que le enterraron, para saber si estaba hipnotizada en los brazos, en la espalda y en la cara interna de los muslos y lo aguantó, y luego le enseñaba sus compañeras y pudieron pasar la prueba.

Después le ponían peso en los antebrazos, la ponen en las posiciones más ridículas. Estuvo 5 días así. A los 3 días la fueron a buscar y la llevaron a su casa y se la entregaron a su padre. También fue interrogada arriba del supermercado

"listo" y torturada con agujas. Estando en el Silva Palma fue sometida al golpe de ambas orejas con la palma abierta y en una ocasión presentó otorragia. Cuando fue evaluada por la parálisis facial, se le encontró cicatrices en ambos tímpanos.

Todo lo anterior se desprende del medio de prueba N° 2 del considerando anterior, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 1700 del Código Civil y con los medios de prueba 19, N° 20, N° 21 y N° 22 del considerando anterior de conformidad al artículo 384 N° 2 del Código de Procedimiento Civil;

c) Al momento de la detención de la demandante, se encontraba estudiando Ingeniería Agrónoma en la Universidad de San Felipe, conforme se desprende de los medios de prueba NN° 20, N° 21 y N° 22, atento a lo preceptuado en el artículo 384 N° 2 del Código de Procedimiento Civil;

d) Cecilia Beatriz Fanjul Lizarralde fue reconocido como víctima listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N° 1.040 de 2003 del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I, particularmente tiene el N° 8.169, conforme al medio de prueba N° 3 del considerando anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1700 del Código Civil;

e) La demandante presenta sintomatología se caracteriza por falta de sueño, perturbaciones crónicas del sueño y descanso. Las pesadillas frecuentes y las memorias recurrentes han creado un estrés severo y continuo en su vida, y los extensivo problemas somáticos sufridos por ella están relacionados directamente con la tortura sufrida. La incidencia del estrés continuo debido a un trauma, afecta no sólo a nivel psicológico, sino que también a la salud física. De esta forma, la demandante presenta daño emocional severo e irreparable, lo que se traduce en un trastorno por estrés postraumático crónico, con sintomatología predominante del tipo re experimentación e hiperalerta y una distimia (depresión crónica), conforme se aprecia del medio de prueba N° 1 del considerando segundo, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1700 del Código Civil.

Además, la demandante grita cuando duerme casi siempre y si la despiertan bruscamente. Se despierta asustada y angustiada gritando horrorizada

f) Al día 28 de marzo de 2022, la demandante recibió la suma de \$33.445.596 conforme a la Ley N° 19.992 y Ley N° 20.874, conforme se aprecia

de los medios de prueba N° 23 y N° 24 del considerando anterior, atento a lo preceptuado en el artículo 1700 del Código Civil.

Cuarto: Primeramente y respecto del fondo del asunto, es necesario explicitar que el artículo 1 inciso 4° de la Constitución Política de la República declara que “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”, idea que se reitera en el artículo 3 de la Ley N° 18.575.

La carta fundamental, en el mismo artículo, mandata que “Es deber del Estado (...) dar protección a la población (...)”

Por otra parte, el inciso 2° del artículo 5 de Constitución, explica que “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Entre los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, está la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, que obliga a los Estados parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades” (artículo 2), derechos y libertades descritas en el artículo 1 del mismo instrumento. Además, el artículo 5.2 del instrumento internacional, explicita que “Derecho a la Integridad Personal. 2 Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. El artículo 63.1 del instrumento citado anteriormente, dispone que “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida

o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.

El Convenio de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos y Enfermos de los Ejércitos en Campaña (Parte III), en su artículo 131, como la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados, en su artículo 27, impiden que los Estados invoquen el derecho interno para eximirse de las responsabilidades en materia de derechos humanos.

El artículo 38 inciso 2° de la Constitución Política de la República dispone una regla de competencia al describir que “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”.

El artículo 4 de la Ley N° 18.575 explicita una acción general de responsabilidad del Estado, puntualizando en el artículo 42 de la misma Ley, la responsabilidad del Estado por falta de servicio.

Quinto: Por ende, es a la persona humana a quien debe respetársele los derechos esenciales que emanan de su naturaleza, garantizarle su pleno y libre ejercicio y, en caso que ellos sean violentados, debe repararse el daño en su integridad, sin que el Estado, so pretexto de alcanzar el bien común, deje de respetar aquéllos ni invoque el Derecho interno para eximirse de su responsabilidad en caso de habérseles atropellado.

Sexto: El primer hecho materia de acreditación en la causa, conforme a la resolución de folio 27, consistió en "Efectividad de que el demandante sufrió violación a sus derechos humanos, privación de libertad y tortura por razones políticas, por parte de agentes del Estado de Chile, durante el período comprendido entre los años 1973 y 1990. Hechos y circunstancias que lo constituyen", lo que se tuvo por acreditado con los hechos letras a) y b) del considerando tercero de esta sentencia, desde que Cecilia Beatriz Fanjul Lizarralde fue detenida en dos ocasiones: tanto el día 11 de septiembre de 1973; así como el día 10 de enero de 1974, ambas en la Región de Valparaíso. En ambas ocasiones, la detención se verificó por agentes del Estado de Chile, como una política de Estado de aquella época.

Además, existe reconocimiento del Estado de Chile respecto de la calidad de víctima de la actora, conforme al hecho acreditado letra d) del mismo considerando tercero, por cuanto fue incorporada al listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, establecida por el Decreto Supremo N° 1.040 de 2003 del Ministerio del Interior, conocida como Comisión Valech I, particularmente tiene el N° 8.169.

En este sentido, respecto de la segunda detención, se acreditó circunstancias más específicas a su respecto, concerniente a los tratos recibidos en el Cuartel Silva Palma de Valparaíso, su traslado a esta ciudad, así como formas de torturas, como hipnosis.

Séptimo: Se debe dejar establecido en esta sentencia que la actuación de los agentes del Estado, descrita en el considerando anterior, como en la letra a) del considerando tercero, constituyó una falta de servicio.

En efecto, la más general de las condiciones de responsabilidad de la Administración y de las municipalidades está definida genéricamente, sin mayores precisiones, como falta de servicio (Ley de bases, artículo 42; Ley de municipalidades, artículo 137).

El estatuto de responsabilidad de la Administración vigente en Chile se ha construido sobre la base del modelo francés de responsabilidad del Estado, donde la jurisprudencia ha concebido la falta de servicio como la infracción a un deber objetivo de conducta, que es análogo al concepto civil de culpa. Ambas nociones suponen un juicio objetivo de reproche sobre la base de un patrón de conducta: mientras en la culpa civil se compara la conducta efectiva del agente con el estándar abstracto de conducta debida en nuestras relaciones recíprocas, en la falta de servicio tal comparación se efectúa entre la gestión efectiva del servicio y un estándar legal o razonable de cumplimiento de la función pública. En ambos existe una gran proximidad entre estos enfoques, ya que ambos atienden al comportamiento que la víctima tiene legítimamente derecho a esperar, aunque en un caso se tenga en consideración el hecho negligente de un agente privado (culpa civil) y, en el otro, el funcionamiento impropio de un órgano de la Administración Pública (falta de servicio). De esta forma, el deber de servicio resulta de la ley.

La normalidad del servicio tiene que ver con expectativas normativas de la comunidad: no se refiere a aquello que uno quisiera como servicio eficiente (que es un estándar que tiende al infinito y que daría lugar a responsabilidad estricta u objetiva en sentido propio), sino a aquello que se tiene derecho a esperar¹.

En efecto, conforme a los hechos asentados letras a) y b) del considerando tercero de esta sentencia, se califica como falta de servicio la actuación de los agentes del Estado desde que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas.

Octavo: El segundo hecho materia de acreditación de la resolución de folio 27, consistió en "Efectividad que los actos imputados al demandado irrogaron perjuicios al demandante", conforme al hecho asentado letra e) del considerando tercero de esta sentencia, por cuanto la demandante presenta sintomatología se caracteriza por falta de sueño, perturbaciones crónicas del sueño y descanso. Las pesadillas frecuentes y las memorias recurrentes han creado un estrés severo y continuo en su vida, y los extensivos problemas somáticos sufridos por ella están relacionados directamente con la tortura sufrida. La incidencia del estrés continuo debido a un trauma, afecta no sólo a nivel psicológico, sino que también a la salud física. De esta forma, la demandante presenta daño emocional severo e irreparable, lo que se traduce en un trastorno por estrés postraumático crónico, con sintomatología predominante del tipo re experimentación e hiperalerta y una distimia (depresión crónica).

Noveno: Es necesario explicitar que una de las definiciones que se ha dado al daño moral es que *se trata de bienes que tienen en común el carecer de significación patrimonial*². Otra definición es *la lesión a los intereses extra patrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene de persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio*³.

¹ Extraído de Barros Bourie, Enrique; *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*. Editorial Jurídica de Chile. Santiago, 2014. Página 506 y siguientes.

² Barros Bourie, Enrique; *Op. Cit.*; Pág. 232.

³ Díez Schwerter, José Luis; *El Daño Extracontractual, Jurisprudencia y Doctrina*; Editorial Jurídica de Chile; Santiago, 1997; Página 88.

Sin embargo, en rigor, *sólo las lesiones a bienes de la personalidad constituyen un daño propiamente moral (entendido como concerniente al fuero interno o al respeto humano); no lo son, por el contrario, el dolor corporal, la angustia psicológica o la pérdida de oportunidades para disfrutar de una buena vida, que, sin embargo, se entienden inequívocamente pertenecientes a esa categoría*⁴.

En este punto, valga expresar que en cuanto a que la comprobación de que las consecuencias de la prisión política y de la tortura no ha dependido necesariamente de su duración, sino más bien de sus características propias, como el tipo de recinto de reclusión, las condiciones de la prisión o la intensidad y métodos de tortura, ha determinado que en esa lista no se distinga por la duración de la prisión.

Décimo: Relativo al quantum indemnizatorio, se ha indicado como criterio de determinación el de la *equidad, aceptado como regla de valoración del daño moral por códigos recientes*⁵; sin embargo, se reconoce que en nuestro país se entrega a la discreción y prudencia del juzgador esta materia.

Se tiene en mente que la función de la reparación del daño moral *es más bien compensatoria: la víctima recibe una indemnización que no pretende restablecer el estado de cosas anterior al daño, sino cumplir la función más modesta de permitirle ciertas ventajas, que satisfagan su pretensión legítima de justicia y la compensen por el mal recibido*⁶.

De esta forma, *la reparación pecuniaria es siempre una compensación que no persigue borrar el perjuicio, cosa imposible, sino procurar, con la atribución de una determinada cantidad de dinero, las satisfacciones que la víctima o acreedor estimen del caso*⁷, por lo que la reparación es un esfuerzo que el derecho hace por otorgar la mejor compensación posible, sin que se garantice hacer desaparecer el daño. El principio que impera en este punto es la reparación integral del daño, según el cual todo daño debe ser reparado y en toda su extensión, por lo que debe tener por objeto poner al demandante en la misma situación en que se

⁴ Barros Bourie, Enrique; *Op. Cit.*; Pág. 287.

⁵ Barros Bourie, Enrique; *Op. Cit.*; Pág. 312.

⁶ Barros Bourie, Enrique; *Op. Cit.*; Pág. 302.

⁷ Domínguez H., Carmen. Contenido del Principio de Reparación Integral del daño; Algunas consecuencias, en especial para el daño moral. Inserto en Domínguez H., Carmen (Editora); *El Principio de Reparación Integral en sus Contornos Actuales*. Editorial Legal Publishing. Santiago, 2019.. Pág. 109-110.

encontraría si no hubiese sido víctima del daño causado por el hecho del demandado⁸.

Prudencialmente, conforme a los hechos acreditados en la presente sentencia en el considerando tercero, la circunstancia que la víctima fue apresada y torturada por agentes del Estado en un período determinado de nuestra historia reciente, en el marco de una política de Estado represiva, las secuelas que dichas circunstancias le ha provocado a la actora duran hasta el día de hoy, el hecho que la detención del demandante se verificó cuando era menor de edad para la época.

Por otra parte, impresionó al infrascrito la violencia sexual a la que fue sometida la actora, descrito en la letra b) del considerando tercero de esta sentencia, particularmente relativo al trato lujurioso de una de sus captoras, que incluso produjo una revictimización en relación con un episodio de abuso sufrido por la demandante cuando era menor de edad, además de los intentos de violación que sufrió en su traslado a esta ciudad, recordemos, en el marco de detención y tratos crueles, inhumanos y degradantes por agentes del Estado como método represivo, no puede soslayarse al momento de fijar el monto de indemnización, aplicándose perspectiva de género respecto de estos episodios.

Todas estas circunstancias conducen a fijar el monto a indemnizar en este caso concreto en la suma de \$130.000.000 (ciento treinta millones de pesos).

Décimo primero: Acreditada que sea la obligación de indemnizar por parte del Fisco de Chile al demandante, como se explicitó con anterioridad, se procederá a analizar si este daño “que reclama el demandante fue indemnizado con anterioridad a la presentación de la demanda. En su caso, forma y cuantía de dicha indemnización” (Nº 4 de folio 27), desde que se alegó –en el fondo- una forma de extinguir las obligaciones, consagrada en el artículo 1567 Nº 1 del Código Civil, a saber, la solución o pago efectivo, al invocarse el pago de la indemnización con anterioridad.

Se dejó asentado en el hecho establecido letra f) del considerando tercero, que la demandante recibió dineros por beneficios contenidos en las Leyes Nº 19.922 y Nº 20.874.

La Ley Nº 19.992 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos

⁸ IDEM. Pág. 115.

individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (artículo 1). Esta pensión es incompatible con aquellas otorgadas en las leyes N°s 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento (artículo 2 inciso 2°). La pensión otorgada –sin perjuicio de lo dicho anteriormente– es compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario y con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes (artículo 4).

La Ley N° 20.874 otorgó un aporte único, en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000 a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a los titulares incluidos en la nómina de víctimas de prisión política y tortura elaborada por la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conforme a las leyes N°19.992 y N°20.405, respectivamente (artículo 1°).

De lo dicho se desprende que la Ley N° 19.992 contempla la idea de la compatibilidad entre el beneficio entregado con cualquiera otro, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario y con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.

A su vez, la Ley N° 20.874 entregó un estipendio único de dinero, como compensación parcial.

La Excm. Corte Suprema de Justicia ha expresado que la mentada incompatibilidad alegada no existe, desde que el Estado tiene un régimen de pensiones asistenciales, sin acreditarse que éstas tiene por objeto satisfacer la merma moral que invocan los demandantes⁹, *criterio jurisprudencial prevaleciente actualmente a nivel interno, acerca del carácter complementario y no excluyente de reparaciones otorgadas en vías administrativa y judicial, es razonable en relación con el derecho de víctimas de graves violaciones de derechos humanos de acceder a la justicia para solicitar una declaratoria judicial de responsabilidad estatal, ya sea para que se efectúe una determinación individual de daños o, en su*

⁹ Sentencia de Excm. Corte Suprema de Justicia recaída en el rol ingreso N° 2289-2015, específicamente en su considerando décimo tercero.

caso, para cuestionar la suficiencia o efectividad de reparaciones recibidas con anterioridad¹⁰, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por todo lo dicho con anterioridad, se descartará la alegación del Fisco de Chile, en cuanto a haberse extinguido la obligación mediante el pago.

Décimo segundo: La defensa fiscal invocó la prescripción extintiva prevista en el artículo 2332 del Código Civil (4 años), contados desde la restauración de la democracia (en el supuesto que se entienda suspendido el término de la prescripción en la dictadura militar por imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes). En subsidio, esgrimió la prescripción extintiva ordinaria contemplada en el artículo 2515 del Código Civil (5 años), lo que se condice con el hecho materia de prueba “Efectividad de que la acción impetrada se encuentra prescrita”, que constituye otra forma de extinción de las obligaciones (artículo 1567 N° 10 del Código Civil).

La Excm. Corte Suprema de Justicia, conociendo de la materia, ha negado la aplicación de este instituto en caso de violaciones a los Derechos Humanos¹¹. Particularmente, el máximo tribunal ha expresado que *en el presente caso no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios en las que los jueces del fondo erróneamente asilan su decisión, al estar en contradicción con las reglas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que protegen el derecho de las víctimas y familiares a recibir la reparación correspondiente, estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por Chile y que, sin perjuicio de la data de su consagración y reconocimiento interno, corresponden a normas de ius cogens, derecho imperativo internacional que protege valores esenciales compartidos por la comunidad internacional que ha debido ser reconocido por los jueces de la instancia al resolver la demanda intentada¹². Así, pesa sobre el Estado la obligación de reparar a los familiares de la víctima consagrado por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, el derecho interno no deviene en un argumento sostenible para eximirlo de su*

¹⁰ Párrafo 100 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile de 29 de noviembre de 2018.

¹¹ Sentencia de casación de la Excm. Corte Suprema de Justicia recaída en el rol ingreso N° 31605-2018, específicamente en su considerando Cuarto y las demás sentencias citadas en aquél.

¹² IDEM, párrafo final del considerando Quinto.

*cumplimiento. No sólo por lo ya expresado sino porque este deber del Estado también encuentra su consagración en el derecho interno*¹³.

Es menester destacar que, incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que *en la medida en que los hechos que dieron origen a las acciones civiles de reparación de daños han sido calificados como crímenes contra la humanidad, tales acciones no deberían ser objeto de prescripción*¹⁴. Apreciación que avalada por el Estado chileno, desde que *comparte el criterio de que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción y que no puede excusarse en el mero paso del tiempo (fundamento de la prescripción) para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo 1973-1990, lo que incluye su arista indemnizatoria*¹⁵. Situación planteada en la sentencia que se aplica en la especie, desde que la acción indemnizatoria intentada por las víctimas en el caso que se cita de la sentencia de la Corte Interamericana decía relación con demandas civiles sin que estuvieran aparejadas con algún proceso penal; de tal forma que *la Corte entiende que los fundamentos del Estado para considerar imprescriptibles las acciones civiles de reparaciones por daños ocasionados en hechos calificados o calificables como crímenes contra la humanidad, con base en la jurisprudencia de la Corte Suprema, son aplicables a cualquier acción civil, independientemente de si ésta es resarcitoria en el marco de un proceso penal o si es una demanda en la vía civil propiamente dicha. Es decir, tal imprescriptibilidad se justifica en la obligación del Estado de reparar por la naturaleza de los hechos y no depende por ello del tipo de acción judicial que busque hacerla valer*¹⁶.

Por todo lo explicitado con anterioridad, se hace imperativo rechazar la excepción de prescripción hecha valer por el demandado, desde que el *Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, pues de hacerlo comete un hecho ilícito que compromete la responsabilidad internacional del (propio) Estado*¹⁷ y por cuanto *de acuerdo al*

¹³ IDEM, considerando Séptimo.

¹⁴ Párrafo 89 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile de 29 de noviembre de 2018.

¹⁵ IDEM, párrafo 92.

¹⁶ IDEM, párrafo 95.

¹⁷ ECS, considerando Quinto de la sentencia de casación recaída en el Rol ingreso N° 31605-18.

contexto en que los hechos se desarrollaron, con la intervención de agentes del Estado, amparados bajo un manto de impunidad forjado con recursos estatales, trae no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de constatar la extinción, por el transcurso del tiempo, del probable ejercicio de la acción civil resarcitoria derivada de ellos¹⁸.

Décimo tercero: Respecto a la alegación subsidiaria del demandado en cuanto a tener en consideración los pagos recibidos la actora por parte del Estado y la debida armonía con los montos establecidos por los Tribunales, se tiene en mente los montos por concepto de indemnizaciones señalados en el caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2018, específicamente su párrafo 121, desde que se citó sentencias por las partes que –en términos generales- la indemnización por resarcimiento de daño moral oscila entre \$30.000.000 y \$150.000.000, conforme el estudio presentado por el Fisco de Chile, y entre \$100.000.000 y \$130.000.000, conforme las sentencias invocadas por el representante de los demandantes en dicha causa.

Décimo cuarto: En cuanto a la solicitud de reajustes e intereses, se accederá a aplicar intereses desde el momento que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada, conforme lo establecido en el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil. Por otra parte, entendiendo que el reajuste tiene como objetivo mantener el poder adquisitivo de una suma determinada, asumiendo que la indemnización debe ser completa, se aplicará el reajuste desde que la presente se encuentra ejecutoriada. El reajuste e interés, por cierto, correrá hasta el pago efectivo.

Concerniente a la entidad de los intereses, ellos serán los corrientes y si el demandado incurre en mora de pago, conforme al inciso primero del artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, correrán a partir de ese plazo el interés máximo legal.

Décimo quinto: En este punto, no se puede soslayar lo aseverado en el considerando décimo segundo de este documento, en cuanto a que conforme a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las

¹⁸ ECS, considerando Octavo de la sentencia recaída en Rol ingreso N° 2289-15.

acciones civiles de reparación de daños calificados como crímenes contra la humanidad, tales acciones no deberían ser objeto de prescripción, apreciación que conforme lo aseverado por dicha Corte, es compartida por el Estado de Chile, ya que no podría excusarse del mero paso del tiempo para no dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales de *investigar, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo 1973-1990, lo que incluye su arista indemnizatoria*¹⁹.

De esta forma, salta a la vista la incompatibilidad de la alegación ventilada por el Estado de Chile en estrados internacionales con lo obrado en esta causa, desde que de acogerse la alegación de prescripción de la acción reparatoria civil a consecuencia de crímenes de lesa humanidad como se esgrimió en autos (ya sea por responsabilidad extracontractual u ordinaria), se estaría incurriendo en responsabilidad internacional, comprometiendo la responsabilidad estatal.

Décimo sexto: La demás prueba no analizada explícitamente en los considerandos anteriores no es idónea para la resolución de la controversia, desde que ella no es atingente respecto de los hechos materia de acreditación.

Décimo séptimo: Conforme a todo lo explicitado con anterioridad, deberá acogerse la demanda intentada en los términos que se dirán a continuación.

Teniendo presente lo dispuesto en los artículos 1, 5, 6, 7, 19 N° 1 y 26 de la Constitución Política de la República; 4 y 42 de la Ley N° 18.575; 2332, 2497, 2514 y 2515 del Código Civil; 160, 161, 170, 253 y siguientes, 384, 432, 433, y 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; los Tratados Internacionales descritos en el presente documento; y auto acordado de la Excm. Corte Suprema de Justicia de 30 de septiembre de 1920, sobre la forma de las sentencias, se declara que:

I.- Se rechaza la excepción de prescripción extintiva interpuesta en la contestación de la demanda de 18 de marzo de 2022, folio 13, conforme a lo razonado en el cuerpo de la presente sentencia;

II.- Se acoge la demanda deducida en folio 1 por Pablo Andrés Bussenius Cornejo en representación convencional de Cecilia Beatriz Fanjul Lizarralde, **condenándose** al demandado Fisco de Chile, **a título de indemnización de**

¹⁹ párrafo 92 de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso Órdenes Guerra y otros vs. Chile de 29 de noviembre de 2018.

perjuicios por daño moral irrogado a la actora, **a pagar a la demandante la suma de \$130.000.000** (ciento treinta millones de pesos);

III.- La suma antes indicada se reajustará conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre la fecha desde que la sentencia se encuentre ejecutoriada y la de su pago efectivo, **más los intereses** corrientes para operaciones de crédito de dinero que se generen en el mismo período, conforme lo señalado en el considerando décimo cuarto de esta sentencia;

IV.- Se condena en costas al demandado por haber resultado totalmente vencido, conforme al artículo 144 del Código de Procedimiento Civil.

Anótese, regístrese, notifíquese y consúltese si no se apelare.

Rol C-1500-2021

Dictada por Javier Toledo Vildósola, Juez Titular.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. En Punta Arenas, a 15 de septiembre de 2022.